

Boletín 223 del WRM, Abril 2016

Racismo en los bosques: un proceso de opresión al servicio del capital

[Suscríbese al Boletín del WRM](#)

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

NUESTRA OPINIÓN

Racismo: un legado del poder colonial

La autora Nigeriana Chimamanda Ngozi nos alerta de los riesgos de escuchar una y otra vez una sola versión de un mismo relato. Ese relato que escuchamos reiteradamente en los libros de historia, los medios de prensa o la literatura, sobre un pueblo o una cultura o un lugar en particular es UNO de los muchos relatos existentes y posibles. Pero entonces, ¿cuál es ese relato que se repite constantemente? La prevalencia de una historia en particular responde casi siempre a las estructuras mundiales de poder: “cómo están contadas, quién las cuenta, cuándo son contadas, cuántas son contadas, es algo que depende verdaderamente del poder (...) las historias han sido usadas para despojar y para difamar.” (1)

La mayor parte de los relatos dominantes que conocemos hoy en día, han sido escritos durante la época de la colonización, por el hombre blanco. A través de estas historias se construyeron e impusieron estereotipos y prejuicios en base a la clasificación de la población mundial sobre la idea de “raza”: negros, blancos, indios, marrones. Por supuesto, como quien escribía la historia, era blanco y era hombre, a los hombres blancos se le atribuyeron las mejores cualidades posibles. A partir de ese momento comienza a gestarse el racismo. La “raza” es una construcción mental de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial. Dicha historia, es decir, que las personas pudieran ser clasificadas según una idea de “raza”, significó una manera de legitimar relaciones de superioridad / inferioridad entre dominados y dominantes (2).

En esta edición del boletín, queremos contar otras historias. Historias que a muchos les incomodan y que tienen que ver con el racismo ligado a la destrucción y contaminación del entorno, a la apropiación de los territorios, a la destrucción de los bosques, de los ríos: se le conoce como Racismo Ambiental.

Es necesario enfrentar y denunciar que el sistema capitalista, enraizado en la lógica colonial, es estructuralmente racista. El modelo económico actual implícitamente bota su destrucción, contaminación, ocupación y violencia sobre las poblaciones negras, indígenas, campesinas con el objetivo de poder seguir explotando, produciendo y por ende, acumulando. Son estas poblaciones a las que el sistema (y todos los que lo defienden) ve como “el otro”. Poblaciones o “razas” que deben ser asimiladas en el sistema o despojadas de todo derecho de ser como “otro”. Y las formas de negar la existencia de otros/as, de seguir imponiendo una narrativa que categoriza a la población sobre la idea de “raza”, puede darse de muchas y diversas formas, aunque casi siempre son violentas.

Cuando se extrae petróleo en Nigeria, cuando se queman millones de hectáreas de bosques en Indonesia para abrir espacios al monocultivo de palma, cuando se construye una mega represa en Brasil, cuando se establece un “parque de conservación” en Tailandia donde se prohíbe la entrada a las poblaciones locales, cuando se establece un proyecto REDD en la República Democrática del Congo: ¿a quién le pertenecen estos territorios? ¿Cuáles son las poblaciones que se ven afectadas? De igual manera, cuando se abre una refinería de petróleo en una ciudad o se instala un vertedero de residuos municipal, ¿acaso se construyen en los alrededores de los barrios ricos, privilegiados, casi siempre “blancos”?

Las respuestas a estas preguntas son las otras historias que hemos elegido abordar en esta edición del boletín. Este boletín habla de manera directa sobre el racismo ambiental.

En este difícil reto de reflexionar sobre el racismo como un proceso de opresión, reconocemos y nos solidarizamos también con las muchas resistencias que lo confrontan. A pesar de todo, los pueblos siguen resistiendo y trazando redes de unidad, contando las muchas historias para construir un mundo donde quepan muchos mundos. Otra vez, recordando las palabras de Chimamanda Ngozi, creemos que “las historias también pueden ser usadas para empoderar y humanizar. La historias pueden romper la dignidad de la gente, pero también pueden reparar esta dignidad rota.”

Esperamos que este boletín ayude a abrir más espacios para las muchas historias que son imprescindibles.

(1) Chimamanda Ngozi Adichie, “*The danger of a single story*”, https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en (video con subtítulos en más de 40 idiomas)

(2) Anibal Quijano, *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*, <https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/07/1161337413-anibal-quijano.pdf>

RACISMO EN LOS BOSQUES: UN PROCESO DE OPRESIÓN AL SERVICIO DEL CAPITAL

Un modelo para el racismo ambiental

En 1969, cuando tenía tres años de edad, mis padres se vieron forzados a mudarse de la casa en la que nació, situada en un barrio de gente de varios colores, etnias e incluso clases, a una duna de arena despojada de toda vegetación y a la que dejaron vacía a excepción de algunas casas de bloque mal construidas, sin electricidad, revoque o cubierta, y cerradas con techo de asbesto.

Tuvimos que mudarnos porque mi familia fue clasificada en Sudáfrica como gente de color (negra), gente de ascendencia mixta. Debido a nuestras características físicas, el Estado - que era un Estado blanco, del apartheid - nos trató de manera diferente.

Las casas, ubicadas en una empinada ladera de arena suelta, carente de vegetación, estaban separadas tan solo por unas escasas láminas de metal de construcción. La vista que teníamos desde nuestra nueva casa era la refinería de petróleo US-Mobil, que como

una maldición volcaba su humareda tóxica sobre la población local de color. El resultado inmediato de esto no sólo fue una lesión a nuestra dignidad y bienestar psicológico sino también daños físicos a nuestro organismo. Al no tener electricidad debíamos hervir agua en un quemador que, siendo un niño pequeño, tiré al suelo derramándome encima agua hirviendo. La ropa quedó adherida a la piel y mi cuerpo se llenó de ampollas. Con las pronunciadas pendientes del lugar y el metal como muro de contención, era casi seguro que ocurriría un desastre. Cuando llegaron las primeras lluvias, mi hermana se resbaló por la ladera y cayó sobre la lámina de metal, cortándose el cuerpo. Con los humos tóxicos llegó el asma, y yo formé parte del 52% de la población juvenil local - la cifra más alta registrada formalmente en el país - afectada por esta maldición. A causa de los gases tóxicos de la refinería de petróleo Mobil y de la fábrica de papel local Mondi - una de las principales subsidiarias de *Anglo American*-, tuvimos retrasos en el crecimiento. Pero lo más alarmante como jóvenes, en ese entorno carente de vegetación autóctona, con gente hacinada en viviendas pobres y una industria sucia en el horizonte, es una realidad y visión de la vida deformada. No podíamos imaginar otro mundo y adquirimos un enfermizo sentimiento de orgullo de tener que vivir en esa realidad de brutalidad industrial y naturaleza destruida.

Tanto esta planificación del apartheid como el racismo ambiental no ocurrieron por casualidad. Fue algo que se construyó a medida que el capital corporativo se confabulaba con el Estado. Al igual que la esclavitud, la planificación del apartheid necesitó tanto de la avaricia empresarial como del Estado para favorecer y proteger a la riqueza. A más de 150 años de la esclavitud y dos décadas después de la desaparición del apartheid, la realidad es que estas leyes racistas dieron lugar a una acumulación inhumana e ilegal de riqueza que hoy sigue estando protegida por “derechos de propiedad” en varias constituciones del mundo, incluso en la propia Sudafricana. El Estado ha creado sistemas para proteger las ganancias mal habidas.

Fundamentalmente, la planificación del apartheid y el subsiguiente racismo ambiental se consideran a menudo en el contexto de la llegada al poder en 1948 del abiertamente racista Partido Nacional, y la aprobación de leyes que obligaban a la segregación de las personas. Pero esto no es del todo correcto. El racismo ambiental vinculado a la planificación urbana se remonta a la década de 1920, cuando el entonces gobierno británico creó la primera ciudad segregada en Durban. El gobierno del apartheid perfeccionó e institucionalizó la planificación británica, que dio lugar a lo que a menudo es referido como “un modelo de gueto”. Los guetos - *townships* en inglés, cuya traducción literal sería municipios - eran los lugares a los que se confinó por ley a la población sudafricana negra, un lugar al que mi familia y yo nos vimos obligados a trasladarnos a vivir en 1969. Así que ¿cómo se ve este modelo en la práctica? Tiene casas precariamente construidas, desprovistas de vegetación autóctona, con caminos polvorientos, industria contaminante en el perímetro, basureros de residuos tóxicos y municipales en el vecindario y, como una buena medida, un alcantarillado funciona frente a tu puerta. Éste es el modelo de la planificación del apartheid.

Cuando hoy se habla de racismo ambiental, a menudo salta a la vista el movimiento de Estados Unidos por los derechos civiles. Esto se debe a que en las décadas de 1960 y 1970, el movimiento negro logró impugnar y documentar exitosamente estas violaciones a los derechos civiles cometidas por el racismo. Fue fácil entonces avanzar de los derechos civiles a los derechos ambientales y, en la década de 1980, en Estados Unidos comenzó a hablarse de racismo ambiental. A esto se suma la forma en que

académicos como el profesor Bullard, en el influyente trabajo *“Dumping in Dixie”* [un vertedero en Dixie], pusieron de relieve cómo la clase social y el color de la piel fueron decisivos para los gobiernos blancos a la hora de decidir dónde colocarían los vertederos tóxicos.

Esta narrativa del racismo ambiental, por lo tanto, no fue muy difícil de hacer en la emergente Sudáfrica democrática de la década de 1990. Quienes ya reclamaban democracia e igualdad para todos a través de las luchas por un sistema justo de vivienda, educación y salud, pudieron fácilmente alinearse con aquellas que procuraban hacer retroceder al racismo ambiental.

Pero a pesar de estas victorias en los derechos civiles en los Estados Unidos, de la victoria democrática en Sudáfrica, y de los numerosas gobiernos alineados al pueblo progresistas que han surgido, sobre todo en lugares como América Latina, los impactos en curso de los “proyectos de desarrollo” dejan su secuela de daño en personas y tierras.

Actualmente, las contaminantes centrales eléctricas alimentadas con carbón en Sudáfrica son causantes de la mayoría de las muertes provocadas por la contaminación del aire entre las comunidades negras pobres de Sudáfrica, en lugar de brindar a las personas una energía útil y accesible. En una Sudáfrica democrática, más del 30% de los sudafricanos viven en la pobreza energética, es decir, no tienen suficiente energía para cocinar y calentar sus casas de manera segura.

Tal como advierte Amigos de la Tierra, Mozambique, grandes proyectos de infraestructura como la proyectada represa Mphanda Nkuwa destruirán la zona inferior del río Zambezi así como las formas de sustento de sus pueblos, y no a cambio de energía para la población local sino para las industrias destructivas en Sudáfrica que requieren un uso intensivo de energía. La colocación de líneas de transmisión en Mozambique para hacer llegar energía a los pobres resulta demasiado cara. Las grandes plantaciones de monocultivos en KwaZulu Natal, una provincia de Sudáfrica, han magnificado los efectos de la sequía de dos años en Sudáfrica, afectando principalmente a quienes menos agua utilizan ya que sus cultivos anuales de subsistencia se secan y sus animales mueren. A diferencia de los productores de monocultivos comerciales, no hay un seguro que los salve. Pero fue también el gran aumento de monocultivos, predominantemente de eucaliptos, en la década de 1980, en la zona central de KwaZulu Natal, lo que dismanteló la industria lechera que daba un gran número de puestos de trabajo, y obligó a la población rural negra a trasladarse a zonas urbanas, provocando la intensificación de la violencia política entre la población urbana y la población rural inmigrante, resultando en miles de muertes.

En la actualidad, nuestros gobiernos mundiales se han rendido frente al poder de las empresas, que afianzarán aún más el racismo ambiental; y serán las comunidades negras e indígenas las que saldrán más perjudicadas. Luego de otra ronda de conversaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2015, los mecanismos de mercado - como REDD - se han afianzado, anunciando un futuro sombrío para los pueblos indígenas en la medida que sus tierras les serán arrebatadas supuestamente para “salvar el planeta y los bosques”, mientras que les quitan sus medios de vida y las plantaciones les absorben sus aguas. Ni un solo gobierno se puso de pie en París durante las conversaciones de la ONU para decir: “esto

dañará a nuestro pueblo, no podemos cumplirlo”. Así que el camino que facilita el racismo ambiental fue acordado a escala mundial, para ser aplicado a escala local.

Pero al igual que muchos de quienes fuimos reubicados en los sombríos días del apartheid, es necesario dar crédito a la gente mayor. Para ellos otro mundo fue posible, ya que lo vivieron, y muchos se aseguraron de que a través de la dolorosa experiencia del apartheid, nosotros, como niños, lo recordáramos. Escuchemos hoy a los pueblos indígenas del mundo y a quienes viven con la tierra y recordemos que otro mundo es posible.

*Bobby Peek, bobby@groundwork.org.za
groundwork – Amigos de la Tierra, Sudáfrica*

“Negro de mierda” y “Naturaleza”: ampliando el concepto de racismo ambiental

Resulta difícil imaginar que el ambientalismo hubiera podido prescindir alguna vez del concepto de “racismo ambiental”. Se trata de un concepto que hace referencia a una realidad que no puede ser abordada “antes” o “después” de la defensa del ambiente sino que debe ser enfrentada cada día, construyendo movimientos contra las formas en que las sociedades opresivas organizan la naturaleza.

El concepto desarma la actitud - muy extendida entre los ambientalistas de clase media - de que “yo no soy racista, así que no me hables de racismo”, y pone de relieve las formas como personas amables sin teorías racistas participan también del racismo, no sólo cuando no tienen en cuenta el grado en que la contaminación fluye hacia la gente negra y marrón y no hacia los blancos, sino también cuando obedecen las reglas de la “alta” sociedad que tienden a prohibir incluso el plantear este tipo de temas incómodos.

Ciudades y bosques

La idea del racismo ambiental surgió en Estados Unidos en la década de 1980, entre los grupos minoritarios que se veían forzados a incorporar en sus organismos enormes cantidades de venenos provenientes de vertederos de basura nuclear o química, botaderos municipales, centrales eléctricas contaminantes, incineradores, aire cargado de pesticidas o agua cargada con plomo.

Lo descrito por los grupos estadounidenses estaba sucediendo en todo el mundo, por supuesto. En 1984 ocurrieron dos desastres: la explosión de la fábrica de productos químicos Union Carbide en Bhopal, India, y la de la planta de gas propano líquido PEMEX en la Ciudad de México, los cuales trajeron el infortunio a un millón de vidas. No mucho después, el trabajo enormemente tóxico de dismantelar computadoras obsoletas comenzó a recaer sobre todo en la mano de obra barata de Asia y África.

Este tipo de racismo ambiental también se había manifestado durante mucho tiempo en los bosques. Entre 1964 y 1992, en Ecuador, Texaco sometió a decenas de miles de indígenas y campesinos (en su mayoría mestizos) a un intenso grado de contaminación derivada de sus yacimientos de petróleo en el Lago Agrio, algo que nunca hubiera sido tolerado en los suburbios blancos ricos de la ciudad de Nueva York. En la década de 1990, se comenzó a “asignar” a las comunidades indígenas de todo el mundo el trabajo

de utilizar sus bosques y páramos para ayudar a absorber la contaminación del dióxido de carbono emitido por industrias cuyas ganancias benefician desproporcionadamente a otros grupos étnicos.

De Estados Unidos a la República Democrática del Congo

De hecho, por cada ejemplo de racismo ambiental en las ciudades seguramente se puede encontrar otro ejemplo en los bosques.

Los movimientos de justicia ambiental de Estados Unidos han denunciado desde hace tiempo el racismo inherente a la forma en que algunas organizaciones ambientalistas grandes, con sede en Washington DC, se desviven por hacer superficiales “maquillajes verdes” a las industrias cuyas ganancias siguen basándose en parte en la desigual distribución de la contaminación en el país.

Pero, ¿acaso no es igualmente racista que el organismo del gobierno del Reino Unido que financia el desarrollo, el Grupo CDC, por ejemplo, invierta dinero público en la empresa palmícola Feronia, en la República Democrática del Congo? El precario negocio de Feronia no podría sostenerse si no hubiera ocupado las tierras boscosas robadas a las comunidades establecidas a lo largo del río Congo bajo la ocupación colonial belga entre 1908 y 1960. Dado el persistente legado de desnutrición y dependencia de salarios de pobreza que continúa afectando a la población local, ¿acaso no es racista que CDC sostenga que sólo trata de “mejorar una situación” “heredada”, de la cual no tiene ninguna responsabilidad, y por la cual no puede hacer nada?

Otra dimensión

Pero el racismo ambiental no se refiere solamente a la distribución racial de la contaminación preexistente o de la naturaleza preexistente. También se refiere a las formas en que se co-definen las personas, los grupos étnicos, la naturaleza y la contaminación en primer lugar. Y quizás sea este aspecto del racismo ambiental el que resulta más visible en los bosques que en otros lugares.

Por ejemplo, el mecanismo REDD no solamente es racista porque se apropia de tierras indígenas para limpiar las emisiones de dióxido de carbono no indígenas. También es racista porque es discriminatorio de las ideas indígenas de la tierra. Los entendimientos indígenas sobre los bosques no llegan siquiera a ser descartados, porque ni siquiera se reconoce su existencia. Hay un racismo similar en lo que la socióloga argentina Maristella Svampa denomina “zonas de sacrificio”, donde las valoraciones indígenas de la tierra son ignoradas por considerarse un obstáculo a la economía de exportación de productos básicos.

O tomemos por caso la “naturaleza” preservada en un sinnúmero de áreas protegidas en todo el mundo. A partir de la creación del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, se trata de una naturaleza que depende de la exclusión de los pueblos indígenas. Se prohíben las innumerables relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas, y se las reemplaza por nuevas relaciones que implican encargados de la vida silvestre, investigadores académicos, guardabosques, turistas y medios de difusión.

En esencia, estas transformaciones no son nada nuevo. En la Inglaterra medieval, las palabras “parque” y “bosque” significaban lugares donde había ciervos reservados para que las élites reales pudieran cazar, no necesariamente lugares donde había árboles. Pero la práctica post-Yellowstone añadió nuevos giros. Las élites intentaron hacer creer que no estaban presentes en la escena al proclamarse representantes de la “naturaleza” no humana. Sin embargo, la palabra “protección” a la que hace referencia el término “áreas protegidas” no se refiere a mucho más que a la protección “de personas sin educación y de piel oscura”.

Por supuesto, bajo ciertos regímenes progresistas se permitió que algunos “nativos” volvieran a ese tipo de “naturalezas”. Pero en el proceso, generalmente tuvieron que aceptar convertirse en pintorescos “nobles salvajes” o en agentes de la gestión ambiental occidental. Por ejemplo, en algunos casos tuvieron que categorizar sus tierras en campos agrícolas permanentes o bosques sin agricultura, sin dejar espacio para otras formas como la de dejar el bosque en barbecho. Esas naturalezas fueron ineludiblemente racistas. La lucha contra el sistema binario ser humano/naturaleza que definió a tales naturalezas, se convirtió en una parte de la lucha más general contra el racismo.

Naturalezas estereotipadas

¿Y acaso el racismo no ha ido siempre de la mano de ideas discriminatorias de la naturaleza que la ubican de alguna manera afuera y por debajo de los humanos?

¿No es algo más que una coincidencia, por ejemplo, que las connotaciones peyorativas de muchas de las palabras que se usan para “bosque” resuenen con el tono racista de términos a menudo aplicados a grupos minoritarios marginados?

En Tailandia, donde el conservacionismo racista a menudo ha impulsado programas para reasentar a las minorías de las regiones montañosas lejos de los bosques de las cuencas, *thuen* (selva) es sólo otra palabra para definir “fuera de la ley”, y *paa* (bosque) se refiere a lo que no es *siwilai* (civilizado). ¿Cuántos calificativos racistas en todo el mundo - *indios de mierda*, *khon thuen*, *nyika*, *spruce monkey*, *kariang*, *jangli*, *jungle bunny* - colocan de manera implícita a sus referentes precisamente en esas zonas que tienen un concepto estereotipado del bosque como primitivo?

Con frecuencia se ha asumido que saber cómo vivir en y con ese tipo de entornos supuestamente “salvajes” - tener las habilidades para modificarlos, ampliarlos, enriquecerlos o interactuar con ellos sin simplemente reducirlos a recursos para un crecimiento infinito - disminuía nuestra humanidad. Los pensadores europeos colonialistas, como John Locke, pensaban que los nativos norteamericanos eran absolutamente incapaces de agregar algún ingrediente humano a la tierra. En la India colonial se consideraba que las tierras “baldías” eran ocupadas por “criminales”. Hoy en día, el Banco Asiático de Desarrollo argumenta que sólo sacando a los pueblos de las zonas montañosas de bosque se podrá llevarlos a la “vida normal”.

Ciencia y responsabilidad

Esto conduce directamente a una pregunta quizás aún más incómoda. Si ciertas naturalezas son racistas, entonces las ciencias que las estudian ¿pueden ser inocentes?

La verdad de la ciencia es que no puede poner todo en duda al mismo tiempo. Debe basarse en determinados supuestos que, por el momento, no son cuestionados, con el fin de verificar otras cosas. Al 2016, uno de esos supuestos es con frecuencia la dicotomía racista que separa al ser humano de la naturaleza.

Por ejemplo, una ciencia ambiental cuyos problemas estén formulados por una agenda fija para “reducir el impacto de los seres humanos en la naturaleza” o para “determinar la capacidad de carga”, con seguridad estará racialmente sesgada, independientemente de las intenciones de los científicos que la practiquen.

Aún así, las ciencias que estudian cosas como “la naturaleza de Yellowstone” no pueden escapar indefinidamente de la responsabilidad de cuestionar - científicamente - la construcción misma de lo que investigan. En la actualidad se reconoce ampliamente que una antropología que trata a los pueblos que estudia como piezas de museo estáticas que deben ser “protegidas” del cambio, es racista. Pero ¿acaso la restauración de la ecología no es igualmente racista? ¿Y qué decir de los modelos climáticos que buscan formas de “estabilizar” las temperaturas mundiales a niveles que resulten óptimos para la economía?

Por supuesto, algunos científicos lo suficientemente valientes como para desafiar los supuestos racistas dentro de su propia disciplina, son considerados por sus colegas como actuando fuera del espíritu científico al que han dedicado sus vidas. Se interpreta que se han embarcado en ataques personales y que siembran la división. El racismo, se les dice, no son más que algunos tipos malos que se comportan de manera inmoral o poco profesional, mientras que la ciencia en sí misma, cuando estudia la “naturaleza”, es ciega en materia racial.

Esta reacción está muy extendida en parte porque ha sido muy eficaz para defender el prestigio de la clase científica y de aquéllos cuyo poder está legitimado por la ciencia. Pero en el fondo es simplemente una reafirmación más de la misma división ser humano/naturaleza. Constituye un obstáculo para la discusión racional, tanto como los propios calificativos raciales.

¿Malestar o construcción de movimientos?

¿Están dispuestos los y las activistas por los bosques a considerar la idea de que ciertos conceptos de la *naturaleza* y los *bosques* - que ayudan a definir el trabajo no sólo de numerosos científicos sino también de organizaciones como el Banco Mundial, la FAO, la CMNUCC, la UNESCO y el CIFOR -, están en cierto modo a la par de términos raciales como *negro*? ¿Están dispuestos y dispuestas a cuestionarse la forma en que utilizan a veces estos términos?

Ampliar el concepto de racismo ambiental de esta manera generará con seguridad una resistencia generalizada, si no histeria. Como señaló hace años la jurista estadounidense Patricia J. Williams, entre las clases profesionales “las cuestiones raciales se rechazaron y reprimieron de manera muy parecida a las cuestiones de sexo y escándalo: se considera que alguien es grosero(a) y transgresor(a) si se mezcla (con alguien de otro grupo racial)”.

Pero quizás aquellos desconcertados por el tema no tengan más que superarlo. Durante siglos, campesinos y pueblos indígenas y del bosque han tenido que soportar el racismo impuesto abrumadoramente a ellos y a sus bosques con fórmulas binarias de ser humano/naturaleza. Comparado con eso, que los ambientalistas de la clase media y

otros tengan que sufrir un pequeño grado de incomodidad temporal, no es nada. Sobre todo cuando las ganancias potenciales son tan desproporcionadas.

Cuando en la reciente cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, celebrada en París, algunos jóvenes activistas afroamericanos que trabajan contra el racismo ambiental en Estados Unidos se encontraron con representantes de la coalición “No REDD en África”, la compatibilidad fue inmediata. Parte de esto puede haberse debido simplemente a que diferentes aspectos de una historia ambiental mundial compartida, repentinamente encajan. Pero quizás se deba en parte a un sentido de que los antiguos conceptos de opresión racial y liberación se están extendiendo, y que nuevas cosas sorprendentes podrían estar a punto de suceder. Éste es el tipo de momentos del cual surge la transformación. La construcción de movimientos es la creación de conceptos.

Larry Lohmann, larrylohmann@gn.apc.org
The Corner House, <http://www.thecornerhouse.org.uk/>

Más lecturas:

Larry Lohmann, “*Ethnic Discrimination in Global Conservation*”,
<http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/lohmann.pdf>
Larry Lohmann, “*Forest Cleansing: Racial Oppression in Scientific Nature Conservation*”,
<http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/forest-cleansing#fn004ref>
Larry Lohmann, “*For Reasons of Nature: Ethnic Discrimination and Conservation in Thailand*”,
<http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/reasons-nature>
John Vidal, “*UK Development Finance Arm Accused of Bankrolling 'Agro-Colonialism' in Congo*”,
<http://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/05/uk-development-finance-arm-accused-bankrolling-agro-colonialism-in-congo>
Julie Cruikshank, *Do Glaciers Listen? Local Knowledge, Colonial Encounters and Social Imagination*, University of British Columbia Press, 2005.
Eduardo Kohn, *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*, University of California Press, 2013,
<http://www.anth.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.anth.d7/files/sitefiles/Kohn%20-%20How%20Forests%20Think%20-%20Introduction.pdf>
Stephen Corry, “*The Colonial Origins of Conservation: The Disturbing History Behind US National Parks*”, <http://www.truth-out.org/opinion/item/32487-the-colonial-origins-of-conservation-the-disturbing-history-behind-us-national-parks>
Patricia J. Williams, *Seeing a Colour-Blind Future: The Paradox of Race*, Virago, 1997.
Maristella Svampa, “*The ‘Commodities Consensus’ and Valuation Languages in Latin America*”, *Alternautas*, July 2015, <http://www.alternautas.net/blog/2015/4/22/the-commodities-consensus-and-valuation-languages-in-latin-america-1>

“Por un cambio de paradigma”: entrevista con Tom Goldtooth, de la Red Ambiental Indígena (IEN)

¿Qué es la Red Ambiental Indígena (IEN)?

La Red Ambiental Indígena (IEN, por su sigla en inglés) nació en 1990 en América del Norte, a partir de la esperanza, el coraje y la visión compartida de jóvenes, mujeres y ancianos indígenas de numerosas tribus, con la voluntad de proteger nuestra dignidad frente a la actual destrucción del ambiente en nuestros territorios. IEN es una gran alianza de comunidades indígenas que está en la primera línea de la resistencia contra los combustibles fósiles, la minería y las industrias tóxicas que invaden nuestras tierras y cursos de agua. Nuestra organización es de base comunitaria y nos auto-

representamos, regidos por los principios del consentimiento libre, previo e informado. Varios de nuestros fundadores provienen de un largo linaje de resistencia indígena contra la colonización de América del Norte.

¿Cómo (y por qué) es que la ejecución de proyectos a gran escala (desde la extracción de petróleo a la construcción de carreteras y represas) afecta más a menudo a las comunidades indígenas y tradicionales?

Desde la perspectiva de nuestros pueblos indígenas del Norte, la conquista y la colonización de nuestras tierras y territorios por colonos europeos que comenzó hace más de 500 años, giró siempre en torno al objetivo de los colonizadores de ejercer el poder y el control de nuestras tierras. Por eso, cuando los invasores europeos llegaron a tierras indígenas, trajeron consigo una cosmología tan diferente a la nuestra que no pudimos comprenderlos y ellos no pudieron comprendernos. El valor más destructivo que impusieron los invasores europeos fue la cuantificación y la “cosificación” del mundo natural mediante la imposición de un valor monetario a las cosas sagradas. Además, cometieron genocidio contra los pueblos indígenas que resistieron. Los que han implementado sistemas económicos capitalistas insustentables, están a la búsqueda permanente de “recursos naturales” para alimentar al gran monstruo que crearon. Ese monstruo necesita energía, por lo que buscan las zonas remotas del país para extraer minerales, construir grandes represas, llevarse nuestros árboles nativos e incluso robar nuestras medicinas tradicionales. Necesitan construir carreteras y vías férreas para acceder a nuestras tierras y territorios. Vivimos en un mundo con una sociedad dominante que siempre quiere tomar y tomar, y nunca devolver. Son como una especie depredadora, no una especie de compasión y amor por los bosques, las aguas, la tierra, las plantas, los animales, las aves, los peces y la vida toda. Creo que esta sociedad dominante tiene ahora un sistema de valores que no respeta la sacralidad de los principios creativos femeninos de la Madre Tierra y la relación con el Padre Cielo. Ellos crearon las políticas neoliberales de la globalización, la liberalización, la privatización, la desregularización y la desnacionalización que constantemente intensifican la violación de nuestros derechos inherentes como Pueblos Indígenas, y que violan las leyes naturales de nuestra Madre Tierra, de su biodiversidad. Es por eso que siempre andan a la búsqueda de petróleo y de los llamados minerales ricos bajo tierra, que derriban los árboles más antiguos, que capturan el Espíritu del Agua y bloquean los ciclos de su flujo vivo.

¿Qué significa para usted “racismo ambiental”?

En Estados Unidos, a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, se realizaron estudios que revelaron que las leyes ambientales y de salud pública de este país discriminaban a los pueblos indígenas y a las “personas de color”. Por “personas de color” me refiero a los afroamericanos, a los latinoamericanos y a los asiático-americanos. Desde principios de la década de 1970 se aprobaron exigentes leyes ambientales nacionales que también requerían su cumplimiento por parte de los Estados. Se trataba de leyes y normas sobre aire limpio, agua limpia y muchas otras referidas al ambiente y la salud. Sin embargo, en la década de 1980 se descubrió que numerosas empresas y fábricas estaban construyendo industrias contaminantes a los vecindarios de las comunidades de “personas de color”, sin ninguna consideración por su salud. Además, cerca de esos grupos - incluidas nuestras naciones (comunidades) tribales indígenas - se instalaron vertederos de residuos tóxicos a gran escala. A

principios de la década de 1990, Estados Unidos y la industria nuclear impulsaron planes para depositar residuos altamente radiactivos de reactores de energía nuclear en tierras y territorios indígenas. El gobierno prometió millones de dólares así como acuerdos de distribución de beneficios con cada uno de los miembros de la tribu para que apoyaran la utilización de nuestras tierras como vertedero de desechos nucleares y tóxicos. Sin embargo, con todas esas formas de desarrollo industrial tóxico, radiactivo y ecológicamente destructivo, el gobierno de Estados Unidos no aplicó las leyes ambientales federales de manera igualitaria. A eso lo llamamos racismo ambiental.

Esto también se aplica a las industrias extractivas relacionadas con la minería y la producción de combustibles fósiles. El gobierno de Estados Unidos, a través de los programas de su Oficina de Asuntos Indígenas, negoció varios acuerdos mineros con nuestros gobiernos tribales, haciendo falsas promesas de que nos beneficiaríamos con esos acuerdos mineros y con las explotaciones de combustibles fósiles. Pero nunca se dispuso la aplicación de normas y reglamentos ambientales efectivos para proteger la calidad del agua y el aire, la salud de nuestra gente y del ecosistema, y los sistemas alimentarios tradicionales. Esto es injusticia ecológica e injusticia en materia de salud.

El hecho de que las tierras tribales remotas en América del Norte contengan gran parte de los recursos energéticos que quedan, sumado al deseo de Estados Unidos de lograr la “independencia energética” utilizando combustibles fósiles, significa que tanto el gobierno como la industria se enfocan agresivamente en las tierras tribales para satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos (y Canadá). Esta presión para explotar los combustibles fósiles en tierras indígenas preocupa enormemente a quienes trabajan en temas de energía y clima.

Debido a que numerosas comunidades tribales están en condiciones económicas de pobreza y los gobiernos tribales tienen la presión de brindar soluciones, la industria energética se aprovecha de la situación prometiendo beneficios económicos a corto plazo, y así poder acceder a las tierras y los recursos indígenas. La posesión de los recursos energéticos sumado al deterioro de las economías da como resultado que muchas de nuestras Tribus Indígenas del Norte sean vulnerables ante las destructivas “soluciones” económicas a corto plazo del mundo dominante.

Ahora, este “racismo” se practica en todo el mundo. Élite de los países del hemisferio Sur que impulsan su agenda nacional de explotación del ambiente natural no tienen consideración alguna por los Pueblos Indígenas de sus países. En todo el mundo se ha intensificado la explotación y el saqueo de los ecosistemas y la diversidad biológica, así como también se han intensificado las violaciones de los derechos inherentes a los Pueblos Indígenas que dependen de ellos. Nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y la soberanía en materia de desarrollo, nuestros derechos inherentes a nuestras tierras, territorios y recursos, se ven cada vez más atacados por la colaboración de los gobiernos con las empresas transnacionales y las organizaciones no gubernamentales conservacionistas. Los activistas y líderes indígenas que defienden sus territorios siguen sufriendo represión, militarización, y hasta asesinato, encarcelamiento, acoso y la difamación al llamarnos “terroristas”. Nuestros derechos colectivos violados se enfrentan a la misma impunidad. La reubicación forzada o la asimilación amenaza económicamente y políticamente a nuestras futuras generaciones, a nuestras culturas, lenguas, formas espirituales y a nuestra relación con la tierra. Esto sucede en todo el planeta - en toda nuestra Madre Tierra. Todo esto es una injusticia.

¿Y esto qué significa para la lucha de los Pueblos Indígenas?

Mirando los últimos 26 años, nuestros Pueblos Indígenas y las “personas de color” del movimiento por la justicia ambiental y económica han puesto el alma en el movimiento ambiental, sacando a la protección del ambiente de su encierro para cambiar las políticas y construir la base de la resistencia estratégica de las comunidades de base afectadas desproporcionadamente por las industrias contaminantes. Pero más aún, también para el cambio social y económico.

La lucha por nuestros Pueblos Indígenas es una lucha en base a derechos. Nosotros, los Pueblos Indígenas de todas las regiones del mundo, defendemos a nuestra Madre Tierra - nuestros bosques, agua, y la vida toda -, de la agresión del desarrollo insustentable y de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales por la minería, la explotación forestal, las mega-represas, la exploración y extracción de petróleo. Nuestros bosques sufren por la producción de agrocombustibles, biomasa, plantaciones y otras imposiciones de las falsas soluciones al cambio climático y del desarrollo dañino e insustentable.

También luchamos contra la mercantilización de la Vida - la Naturaleza - de la Madre Tierra y el Padre Cielo. El capitalismo de la naturaleza es un perverso intento de grandes empresas, industrias extractivas y gobiernos de lucrar con la Creación mediante la privatización, mercantilización, y la venta de lo sagrado y de todas las formas de vida, y del cielo, incluido el aire que respiramos, el agua que bebemos, y todos los genes, plantas, semillas tradicionales, árboles, animales, peces, la diversidad biológica y cultural, los ecosistemas y los conocimientos tradicionales que hacen posible y placentera la vida en la Tierra.

La Madre Tierra es la fuente de vida y necesita ser protegida; no es un recurso para explotarlo y mercantilizarlo como “capital natural”. Como Pueblos Indígenas, entendemos nuestro lugar y nuestras responsabilidades dentro del orden sagrado de la Creación. Nos duele la falta de armonía del mundo cuando somos testigos de la deshonra al orden natural de la Creación y la continuada colonización económica y la degradación de la Madre Tierra y de toda la vida que hay en ella.

El mundo moderno no puede alcanzar la sustentabilidad económica sin justicia ambiental y sin una fuerte ética ambiental que reconozca nuestra relación humana con la sacralidad de la Madre Tierra. El futuro de la humanidad depende de un nuevo paradigma económico y ambiental que reconozca plenamente los ciclos de vida de la naturaleza y que reconozca los derechos de nuestra Madre Tierra.

Además de nuestra lucha por nuestros Derechos como Pueblos Indígenas, la lucha es por el reconocimiento de los derechos del agua a ser saludable; y los derechos del Bosque y la Mujer Sagrada del Bosque a ser saludable. Ésta es nuestra lucha.

A menudo comparto mis miedos, preocupaciones y puntos de vista sobre la cuestión de nuestras luchas. Pienso que si continúan las tendencias actuales, los árboles nativos ya no encontrarán lugares habitables en nuestros bosques, los peces ya no encontrarán sus ríos habitables, y la humanidad encontrará sus territorios inundados o afectados por la sequía debido a un clima cambiante y a fenómenos climáticos impredecibles y

extremos. Nuestros Pueblos Indígenas ya han sufrido de manera desproporcionada los efectos negativos y acumulados del calentamiento global y el cambio climático, así como los efectos negativos de la industria extractiva de combustibles fósiles y sus sistemas de procesamiento.

La Madre Tierra y sus recursos naturales no pueden sostener las necesidades de consumo y producción de esta sociedad moderna industrializada y su paradigma económico dominante, que valora el crecimiento económico rápido, la acumulación de riqueza tanto individual como empresarial, y que está en una carrera para explotar los recursos naturales.

Veo los riesgos de un sistema de producción no regenerativa del mundo que crea exceso de residuos y contaminación tóxica. Hemos reconocido la necesidad de que los países, ya sean de aquí del Norte o del Sur, apunten a nuevas estructuras económicas, regidas por los límites absolutos de la sustentabilidad ecológica, las capacidades de carga de la Madre Tierra. Veo la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos mundiales y locales. Imagino que necesitaremos el estímulo y el apoyo de comunidades autosustentables.

Como Pueblos Indígenas observamos que las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros sectores financieros y privados, en especial las industrias extractivas y energéticas, y - dentro de Estados Unidos - Estados como California, impulsan una agenda de la economía “verde” que amplía la mercantilización, privatización y financierización de las funciones de la Naturaleza. Estas funciones de la Naturaleza son los ciclos dadores de vida de la Madre Tierra.

Éste es uno de los problemas más apremiantes que enfrentamos como Pueblos Indígenas. Este régimen de la economía “verde” asigna un precio monetario a la Naturaleza y crea nuevos mercados financieros que sólo aumentarán la desigualdad y acelerarán la destrucción de la naturaleza - de la Madre Tierra - y, a su vez, de nuestras tierras indígenas. No podemos poner el futuro de la Naturaleza y de la humanidad en manos de mecanismos especulativos financieros como el comercio de carbono, los regímenes de compensación de carbono - tales como la “Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación” (REDD) - y otros sistemas del mercado de compensaciones por pérdida de conservación y de biodiversidad.

Los proyectos tipo REDD y los proyectos de compensación de carbono ya son causantes de violaciones de los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción ambiental. Si REDD+ llegara a implementarse en todo el mundo, podría abrir las puertas al mayor acaparamiento de tierras de los últimos 500 años. Estas iniciativas permiten que delincuentes empresariales como Shell y Chevron salgan indemnes.

Del mismo modo que históricamente se utilizó la doctrina del descubrimiento para justificar la primera ola de colonialismo, alegando que los Pueblos Indígenas no tenían alma y que nuestros territorios eran “*terra nullius*”, tierra de nadie, ahora el comercio de carbono y REDD+ inventan argumentos igualmente deshonestos para justificar esta nueva ola de colonización y privatización de la naturaleza. Esto es muy grave.

La relación inseparable entre los seres humanos y la Tierra, inherente a los Pueblos Indígenas, debe ser respetada por el bien de todas nuestras generaciones futuras y de toda la humanidad. Ésta es la lucha.

¿Conoce usted otros criterios verticalistas en los territorios indígenas que sean menos evidentes o visibles? Y si es así, ¿podría explicar cómo esas imposiciones son también expresiones de racismo ambiental?

En la mayoría de los sistemas de gobierno nacionales, estatales y subnacionales, tanto del Norte como del Sur, no existen mecanismos para una participación significativa de los Pueblos Indígenas en la formulación de políticas. La mayoría de los gobiernos tiene una política paternalista y verticalista que decide qué es lo mejor para sus Pueblos Indígenas. Esto se da especialmente con las políticas de producción de energía y extracción de minerales. Muy rara vez los gobiernos están dispuestos a conceder a sus Pueblos Indígenas derechos sobre el subsuelo, y limitan así sus derechos territoriales. Hay una duda constante en cuanto a que los gobiernos nacionales realizan acuerdos secretos que luego, cuando se implementan, atentan contra los derechos de los Pueblos Indígenas. Así que, ¿qué mecanismos defendemos?

Los principios, o las normas, del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) son muy importantes en todas las decisiones gubernamentales que se adoptan. El CLPI también contempla el derecho inherente de nuestras comunidades indígenas a negarse a alguna forma de explotación dentro de nuestros territorios que consideremos lesiva. En el Norte, el gobierno de Estados Unidos quiere limitar nuestra voz y nuestro derecho a negarnos, y sigue impulsando las políticas de “consulta”. La pregunta es ¿consulta a quién? A los gobiernos les gusta “consultar” a nuestros intermediarios indígenas y en realidad nunca llegan a las bases, a la comunidad, para reunirse con el colectivo de nuestras comunidades y discutir todos los aspectos de la forma de desarrollo que quieren imponer a nuestro pueblo. Muy a menudo ya llegan con los planes hechos. Esto sucede en todas partes. Es por esto que exigimos que nuestras comunidades indígenas estén plenamente informadas antes de que ocurra el emprendimiento. Y tenemos derecho a estar plenamente informados de todos los aspectos de lo que se propone. De lo bueno y de lo malo. Y, por último, tenemos derecho a ofrecer nuestro consentimiento colectivo, incluso si tenemos que decir que no al proyecto. El gobierno debe respetar nuestro derecho a decir que no. Pero este no es el caso.

¿Cómo piensa que el movimiento de solidaridad por la justicia social y ambiental puede ayudar a la lucha contra el racismo ambiental en todas sus formas?

En el Norte, en la década de 1990, cuando el racismo ambiental llegó a su apogeo y se reconocieron nuestros reclamos de justicia ambiental, nos unimos como Pueblos Indígenas con las minorías, con las “personas de color”. Lo hicimos como una estrategia política para construir poder para el cambio. Como Pueblos Indígenas, somos las “primeras naciones” e indígenas de las tierras y territorios de Estados Unidos, y dijimos a las “personas de color” y a los movimientos por la justicia social que lucharíamos juntos a ellos, en la medida que ellos también se solidarizaran con nuestros derechos como Pueblos Indígenas. Vimos la necesidad de construir una base de poder de solidaridad con otros movimientos por justicia social y ambiental como forma de fortalecer nuestras voces para lograr el cambio en Estados Unidos. Esta estrategia continúa dentro del movimiento climático, ya que hemos aplicado el concepto de

“justicia” al clima. En este movimiento por la justicia climática compartimos muchos de los problemas que también tienen otras comunidades que enfrentan el racismo y la pobreza, y son marginadas y discriminadas por la sociedad dominante de Estados Unidos. Por lo tanto, hemos formado nuestras propias alianzas de justicia climática y hemos movilizad a comunidades que hoy están en la vanguardia de la lucha contra la economía de los combustibles fósiles, para elevar una sola voz que exige cambiar el sistema, no el clima.

Es necesario el diálogo entre los Pueblos Indígenas y los pueblos no indígenas y las comunidades que están en la primera línea de las luchas, para presionar a sus gobiernos a reevaluar un sistema jurídico colonial que no funciona. Se necesita de esta solidaridad para construir una base de poder, para desarrollar la educación popular con la que informar a las comunidades históricamente oprimidas de lo que está sucediendo a nuestra Madre Tierra. A través de la educación popular y los principios de organización basada en la comunidad, cada vez más personas reconocen la necesidad de un cuerpo jurídico que reconozca los derechos inherentes del ambiente, los animales, los peces, las aves, las plantas, el agua y el propio aire.

Actualmente vemos que hay movimientos sociales que comienzan a identificar una estructura de poder que no tiene respeto por nadie, excepto el pequeño 1% de las elites ricas. Ahora comienzan a ver la sabiduría y la importancia de las cosmologías, filosofías y visiones indígenas del mundo. Vale la pena el esfuerzo de movilizarse para cambiar el sistema, junto con otros movimientos no indígenas. Necesitamos poder popular para buscar y alcanzar soluciones a largo plazo que se aparten de los paradigmas e ideologías predominantes centrados en la búsqueda del crecimiento económico, el lucro empresarial y la acumulación de riqueza personal como los principales motores del bienestar social. Las presiones externas del mundo seguirán teniendo efectos negativos en nuestros Pueblos Indígenas. Así que, ¿cómo cambiamos esto? Trabajamos en red y construimos alianzas con los aliados no indígenas y con los movimientos sociales. Las transiciones apuntarán inevitablemente a sociedades dominantes que puedan ajustarse de manera equitativa a los niveles reducidos de producción y consumo, y sistemas cada vez más localizados de organización económica que reconozcan, honren y estén delimitados por los límites de la naturaleza reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Gracias.

Rompiendo ataduras: La resistencia a la cartografía capitalista

Para muchos, la cartografía es una técnica nada sospechosa que nos ayuda a orientarnos en el mundo. Lo que se suele ignorar es la importancia de saber cuáles agendas políticas están al servicio de los mapas. Incluso la industria mundial de la “contra-cartografía”, que sigue siendo útil en parte para resistir a las invasiones que la cartografía convencional favorece, ha comenzado a adoptar la espacialidad, la temporalidad y la lógica del cambio que están en la base de la cartografía hegemónica. En muchas regiones, la participación y la posesión de acciones en la industria minera y las plantaciones, o en proyectos REDD y demás proyectos de compensación de emisiones, substituyen la lógica de resistencia y reparación, a la que supuestamente estaría sirviendo la cartografía participativa. Es pues necesario incorporar una historia crítica de los movimientos en pro de una “cartografía desde adentro” – lo contrario de la

cartografía hegemónica “desde afuera” – a las agendas de aprendizaje social, con el fin de contribuir al logro de un cambio real.

Las últimas cuatro décadas han sido testigo de cambios radicales en los países del Sur. En medio de una economía mundial cada vez más integrada en base a la energía y las materias primas, empresas fuertemente financiadas se precipitaron a ocupar nuevos o potenciales lugares con valor de producción. La producción ha sido fragmentada y redistribuida, los regímenes comerciales desensamblados y reorganizados, y los Estados nacionales reconfigurados en consecuencia. A medida que las antiguas etiquetas “Hecho en Alemania” o “Hecho en Japón” son siendo reemplazadas por “Hecho en el mundo”, han ido apareciendo formas nuevas y más rápidas de deterioro ecológico y social.

Entre dichos cambios figura el de la cartografía (o mapeo). En el pasado, la presentación de la tierra sobre mapas solía ayudar a las empresas y los Estados a reclamar territorios y organizar los conocimientos necesarios para acumular capital. Frecuentemente se descartaban “otros” reclamos y saberes considerados irrelevantes.

La cartografía capitalista expande y transforma la logística militar. Dicha cartografía se está volviendo más especializada y estrecha en su formación disciplinaria, no sólo al acumular conocimientos considerados útiles para la reproducción de la economía mundial, sino también al descartar o condenar al mismo tiempo cualquier “otro” conocimiento declarado irrelevante. Hoy en día, la cartografía parece estar volviéndose aún menos democrática y más elitista, apartándose aún más de las preocupaciones de los grupos sociales más débiles. Inversionistas y líderes políticos examinan los mapas del mundo para saber en qué lugares es “tolerable” “reducir las regiones productoras de alimentos”. Dónde se pueden adquirir “depósitos de carbono en bosques tropicales” al más bajo precio. Dónde es más bajo o más alto el precio en dólares de la tierra agrícola. Dónde se pueden abrir más fácilmente nuevos “corredores” que faciliten la simplificación de la producción y el comercio a través de miles de kilómetros de fronteras topográficas y políticas, reorganizando a su paso poblaciones humanas y no humanas. El llevar “desarrollo” a quienes han sido afectados por las inversiones a gran escala, que fueron preparadas por tales mapas, es el argumento frecuente en defensa de la destrucción.

En el lapso de cincuenta años a partir de fines de los años 60, ese enérgico reordenamiento cartográfico del mundo ha inspirado confianza dentro de un amplio espectro político – incluso dentro de algunos movimientos ecologistas – en la utilidad de esas “geografías” reduccionistas.

La “planificación espacial” impulsada por el Estado mapea fuera de los bloques de inversión existentes o en zonas ya construidas, las áreas que puedan ser arrasadas con el menor costo político posible, a fin de que estén disponibles para la próxima ronda de inversión internacional. Drones y satélites permiten que los Estados y las empresas obtengan, con un margen de error inferior a un metro, una representación rentable de cualquier espacio, desde los tipos de suelo hasta las fronteras legales.

Mientras tanto, las comunidades locales tienen dificultades para obtener compensaciones por la invasión de sus territorios, puesto que los mapas que usan sus adversarios estatales o empresariales ni siquiera permiten reconocer qué tendrían que compensar.

Espacios alternativos

Sin embargo, incluso las tentativas más enérgicas y sistemáticas de rediseñar el mapeo de la tierra en favor de una nueva oleada de saqueo desencadenan sus propios adversarios. Cada intento de expandir las fronteras del espacio monopolizado con el fin de generar mayores beneficios económicos provoca esfuerzos por definir, defender, reivindicar y recrear espacios “alternativos”.

Dichos espacios se pueden encontrar no sólo en grandes eventos como el Foro Social Mundial, que tienen lugar en ciudades como Porto Alegre, Mumbai o Túnez. También surgen en muchos lugares donde la erosión de los bienes comunes está llevando a la gente a intentar reconectarse con sus bosques, montañas y suelos.

Potencialmente, esos espacios “alternativos” pueden también ser construidos a partir de los espacios-de-vida transitorios, a menudo ignorados, de los nuevos desposeídos, que incluye a los asentamientos urbanos, obreros oprimidos y refugiados rurales. En dichos grupos, el sentimiento de comunidad sólo se invoca en situaciones de emergencia, como la amenaza de desalojo, y se manifiesta en forma de revueltas o motines. Sin embargo, de esas situaciones de emergencia surgen también espacios duraderos para el aprendizaje colaborativo, que no son televisados ni financiados, ya sea para volver a sembrar una tierra asolada, cultivar alimentos para satisfacer las necesidades internas de la comunidad, entre otros fines. Dichos esfuerzos son algunas de las formas de rebrotar ciertos órganos necesarios para seguir avanzando.

La cartografía alternativa

Intentos de mapear dichos espacios podría potencialmente perfilar los nuevos terrenos de lucha contra la expansión capitalista. Pero también podrían terminar favoreciendo los intereses imperialistas o corporativos globales.

La “contra-cartografía” y la “cartografía participativa” son ejemplos de esto. La contra-cartografía generalmente recurre a profesionales para trazar mapas que representen mejor los intereses y las inquietudes del común de la gente, mientras que la cartografía participativa suele depender en parte de información que sólo la gente del lugar puede aportar.

Dichos esfuerzos suelen ser bien intencionados, pero pueden también reproducir las formas discriminatorias de pensar sobre el espacio que caracterizan a los mapas dominantes.

Pueden, por ejemplo, excluir las opiniones de quienes no son capaces de utilizar las técnicas cartográficas, o de quienes no entiendan el vocabulario que emplean. Pueden representar los espacios-de-vida locales como lugares situados en una matriz de propiedades o de prospección, contradiciendo así lo que define a dichos espacios-de-vida. Incluso cuando pretenden representar el alcance de la invasión de tierras ancestrales o la proliferación de los movimientos de resistencia, probablemente no podrán examinar en profundidad, y menos representar en un mapa unidimensional, la naturaleza de los conflictos subyacentes.

Además, los intentos de mapeo “alternativo” pueden terminar sirviendo como fuentes de información de gran valor comercial, que tanto los Estados y las corporaciones no consiguen fácilmente, como la ubicación por GPS de algún acantilado cuyo color coincida con las muestras de determinado mineral, o el conocimiento de prácticas de conservación locales que puedan ser luego mercantilizadas y vendidas, por ejemplo, en el marco de programas REDD+ o de otro tipo.

En Indonesia, por ejemplo, la Decisión 35 del Tribunal Constitucional de 2013 ordena el reconocimiento por parte del Estado de los “bosques consuetudinarios” en los mapas de los territorios tradicionales. Estos fueron cartografiados y administrados junto con las comunidades que participaban en REDD. Para fines de 2014, la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago Indonesio (AMAN) presentó 517 mapas, que abarcaban una superficie de más de 4.8 millones de hectáreas, al ahora extinto Consejo Ejecutivo de REDD+, que había asumido el papel de “custodio de datos” geográficos.

En el peor de los casos, la cartografía “participativa” degenera en simple manipulación. Un ejemplo notorio es lo que sucedió en Indonesia cuando el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) prestó 50 cámaras de video a miembros de la comunidad de Lamalera de la isla de Lembata, e impartió cursos de formación para la grabación en video a la población. Poco después, la comunidad usó las cámaras para grabar una caza anual de ballenas con fines no comerciales y en parte ceremoniales en las aguas costeras de la isla. Luego de recuperar las cámaras, el WWF se sirvió de las grabaciones para desacreditar a los habitantes de Lamalera y proponerle al gobierno que prohibiera los rituales de ese tipo, sin molestarse en analizar ni comprender la historia social de los lamaleranos.

Caminos a seguir

En nuestros intentos de desafiar o “descentrar” el agresivo intento de re-mapear el mundo por el resurgente colonialismo, podemos aprender mucho de algunas formas alternativas, sólidamente establecidas, de organizar el espacio y el tiempo.

El cosmos balinés, por ejemplo, asocia el espacio cardinal, como las direcciones de brújulas, no sólo a virtudes, colores y grados de sacralidad, sino que también conecta los fenómenos cósmicos, las actividades humanas profanas y sagradas, junto a un conocimiento agudo y preciso del espacio-de-vida ecológico con un sistema de calendario híbrido. Este sistema híbrido contiene los calendarios lunar y solar, e incluye los calendarios gregoriano, hijri, chino, wuku y çaka. La idea es calibrar los ciclos temporales de los rituales sociales o ceremoniales en función de las ventajas que ofrecen las dinámicas del clima y los microclimas. Hoy en día, por ejemplo, los residentes de las cuatro comunidades que custodian el Lago Tamblingan entienden y viven de acuerdo a un mapa mental detallado del paisaje que se basa en un conjunto de leyes ecológicas que figuran en inscripciones del año 480 D.C.

Los mapeos del espacio asociados al, por ejemplo, *Shan Hai Jing* o Libro de los Montes y los Mares, de dos milenios de antigüedad, o a los *mappamundi* de la Europa medieval, nos proveen de más herramientas para realizar un análisis crítico de la cartografía contemporánea capitalista.

La resistencia, la recuperación y la reapropiación de los bienes comunes requerirán de esfuerzos colectivos para entender y denunciar la brutal extracción actual. En ese contexto, es importante resaltar el rol que la cartografía – incluyendo muchas formas de cartografía participativa – juega en ayudar a perpetuar dicha extracción. No obstante, la resistencia, la recuperación y la reapropiación de los bienes comunes requieren también de otros tipos de mapeos, que pongan en relieve códigos y razonamientos diferentes de los de la geografía capitalista dominante, en lo que respecta al uso del espacio, del tiempo de trabajo, de la energía y de los materiales de la tierra.

Hendro Sangkoyo, hendro.sangkoyo@gmail.com
School of Democratic Economics, Indonesia

Lecturas complementarias:

- Dorofeeva-Lichtmann, Vera V. (1995). *Conception of Terrestrial Organization in the Shan Hai Jing*. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, Tome 82, 1995, pp. 57-110, http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1995_num_82_1_2297.
- Biggs, M. (1999). *Putting the State on the Map: Cartography, Territory, and European State Formation*. Comparative Studies in Society and History, Vol. 41, No. 2 (abril de 1999), pp. 374-405, <http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/statemap.shtml>.
- A.B. Coury, Hendricks, T.A., y Tyler, T.F. (1978). *Map of prospective hydrocarbon provinces of the world*. U. S. Geological Survey.
- Sassan S. Saatchi y otros (2011). *Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, <http://www.pnas.org/content/108/24/9899.full>.
- Banco Mundial (2011). *Rising Global Interest in Farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits?*, <http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/Rising-Global-Interest-in-Farmland.pdf>.

Mapeo comunitario: geo-grafiando para la resistencia

La geografía es una disciplina asociada a la memorización de accidentes geográficos (montañas, ríos, valles, etc.) y a la “simple” confección de mapas, entendidos generalmente como un retrato fiel de la realidad, y no como una representación creada desde un determinado punto de vista. Y por otro lado pero formando parte del mismo conjunto, para los Estados y el capital, la Geografía siempre había sido considerada un saber estratégico para “hacer la guerra”. Según el geógrafo radical Lacoste esto iba mucho más allá del sentido estricto de “dirigir operaciones militares”: el conocimiento sobre el espacio se asociaba a la política en un sentido más amplio, siendo esencial para conocer, organizar y controlar el espacio y la población sobre los cuales el aparato del Estado ejerce su autoridad. El análisis de Lacoste nos señala que el papel de la Geografía para el fortalecimiento de los Estados y las empresas fue más allá del conocimiento estratégico: a partir de su institucionalización (como disciplina académica y escolar en el siglo XIX), la Geografía pasó a cumplir un rol fundamental en el proceso de legitimar en los imaginarios colectivos el monopolio del Estado como ordenador del territorio.

Esta perspectiva oculta una mirada total sobre el espacio, generando dos consecuencias distintas, pero estrechamente vinculadas. Por un lado, naturalizaba las configuraciones espaciales como hechos dados (las fronteras nacionales y las divisiones político-administrativas dentro de los Estados, por ejemplo), como si la conformación de los espacios no fueran procesos políticos, simultáneos al proceso mismo de organización de una sociedad. Por otro, ese ocultamiento es responsable de la creación de un

determinado imaginario colectivo que naturalizó la vinculación inherente del territorio al Estado. Como si otros grupos/colectivos no fueran también actores que se apropian y crean espacios, siendo por lo tanto agentes legítimos de ordenamiento de sus propios espacios de vida y reproducción.

Este poderoso imaginario colectivo empieza a ser más cuestionado a partir de los años 1970 (y más fuertemente en las décadas siguientes) tanto en el ámbito académico (para lo cual la obra de Lacoste fue esencial) como por los propios movimientos sociales que empiezan a organizarse a partir de entonces con base en nuevas estrategias discursivas. Los movimientos indígenas y afros impulsaron una movilización por el reconocimiento de la diversidad cultural, lo que trajo a superficie el hecho de que los Estados nacionales, lejos de estar constituidos por una unidad cultural y territorial homogénea, se constituyen por una enormidad de particularidades culturales que eran sistemáticamente atropelladas por el ordenamiento territorial estatal, que es criticado como un desordenamiento de las formas de vida de los distintos pueblos. Basados en un análisis crítico del modelo de Estado hegemónico, estos grupos cuestionan la naturalización de la asociación directa entre Estado, nación y territorio, buscando con eso deshacer este mito fundador de la llamada “Modernidad”.

Articulados en torno a demandas por territorio y autonomía, estos movimientos explicitaron la existencia de formas diversas de apropiación y uso del territorio, así como de maneras distintas de relacionarse con la naturaleza, de organizarse política y económicamente e intentaron a través de sus luchas forzar el Estado a reconocer sus diferentes geografías. Sus demandas confrontaban directamente el modelo de desarrollo y de organización social de la colonialidad, proponiendo una ruptura con el poder emanado de ésta, pero también una ruptura con los saberes que le sirven, proponiendo transformaciones políticas, epistémicas y territoriales.

El caso de las organizaciones indígenas latinoamericanas (principalmente en Ecuador, Bolivia, México y Colombia) es quizás el más emblemático en relación al cambio de discurso respecto a este imaginario. Al politizar su identidad y considerar como punto clave su condición étnica como diferentes, los hasta entonces autoidentificados como campesinos cambiarán radicalmente sus discursos y sus estrategias. De esa manera, la antigua lucha por la tierra fue ampliada y transformada en lucha por territorio, autodeterminación y autonomía. Sin embargo, la denuncia respecto a la diversidad cultural (y sus respectivas territorialidades) dentro del Estado-nación no se restringe al movimiento indígena: también sectores urbanos, negros, campesinos, colectores (el caso de los seringueiros en Brasil) entre otros vinieron articulándose a partir de los 80 basados en un discurso que articula el reconocimiento/respeto a las demandas de autonomía territorial en el seno de los Estados nacionales.

En diálogo constante con estos movimientos y con las ciencias políticas, la Geografía también pasó por un periodo de replanteamiento crítico a partir del cual la supuesta neutralidad de la producción académica y escolar empezó a ser cuestionada. La “nueva Geografía” de la escuela brasileña, encabezada por Milton Santos, Carlos Walter Porto Gonçalves o Rogério Haesbaert, amplió su comprensión de lo político y del territorio, cuyo entendimiento dejó de estar vinculado exclusivamente al Estado. El territorio y las relaciones de poder pasaron a ser entendidos a partir de una perspectiva más amplia, a través de los múltiples sujetos involucrados en el espacio. El territorio deja de tener el monopolio del Estado, la geografía se convierte en un aporte para marcar, demarcar la

tierra, graficarla para ser apropiada material y simbólicamente por los grupos subalternos, dimensiones indisociables. Por ello, el territorio no es un hecho dado con anterioridad, sino el resultado de una lucha de distintas intensidades por la apropiación de un determinado espacio entre distintos actores, siendo redefinido de forma continua.

Nos parece fundamental la reapropiación crítica del concepto de territorio por parte de los movimientos sociales, así como la estrategia de “mapeo” de sus territorios para la apropiación de los mismos, para la disputa frente a los múltiples despojos. Desde esta mirada de la geografía crítica, entendemos que el ejercicio del mapeo comunitario puede ser una herramienta de lucha y de transformación social, desde la perspectiva de generar poder desde los sujetos políticos que están enfrentando la territorialización del capital en sus espacios de vida. Como una forma de forjar imaginarios colectivos e individuales de legitimidad de la apropiación del territorio frente al Estado y las empresas, como forma de estimular procesos de (re)conocimiento del propio territorio por parte de las generaciones más jóvenes en diálogo con las personas mayores conocedoras del mismo, en un contexto de descampesinización.

Destruir la jerarquía de saberes entre personas con título de geografía y las comunidades que hacen territorio es fundamental. El formato final de la cartografía resultante, variará dependiendo de la finalidad que tenga: desde procesos de mapeo en los que no haya ninguna cartografía, mapas mentales, mapas diagramados, producciones artísticas, planes de vida de contraordenamiento territorial, mapas cartesianos con todos los requisitos legales, etc. Dependerá de la escala del reclamo, de la necesidad organizativa. Sin embargo, nunca hay que olvidar que la Geografía siempre es un arma para la guerra. Lacoste nos recuerda que con las mejores intenciones, se puede estar brindando la información más preciada por el enemigo. Existe el riesgo de que si se concibe al mapeo como un fin y no como un medio, se esté dando un fuerte aporte en las estrategias de ordenamiento del Estado y las empresas capitalistas. Además de que el propio mapeo comunitario ha sido una de las herramientas más utilizadas por relacionadores comunitarios de empresas petroleras, funcionarios de ministerios interesados en destruir territorialidades indígenas, ONGs conservacionistas o capitalistas que buscan implementar plantaciones de árboles, por poner solo algunos de los ejemplos más conocidos. La geografía crítica será un aporte siempre que mire la disputa por el territorio entre distintos sujetos políticos, y opte por poner sus herramientas al servicio de la apropiación territorial de los pueblos despojados. El mapeo comunitario puede ser desde esta óptica una de las tácticas a utilizar.

*Manuela Silveira y Manuel Bayón, geografiacriticaecuador@gmail.com
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador*

*El artículo completo original está disponible en
<https://geografiacriticaecuador.org/2016/04/10/mapeo-comunitario-geo-grafiando-para-la-resistencia/>*

Algunas obras fundamentales de la geografía crítica en las que se basa este texto:
LACOSTE, Yves (1990 [1976]). La geografía: un arma para la guerra. Barcelona: Editorial Anagrama.
SANTOS, Milton (1978). Por una Geografía nueva. São Paulo: Hucitec/EdUSP.
<https://geografiacriticaecuador.files.wordpress.com/2013/01/santos-por-una-geografica-nueva-completo.pdf>
PORTO GONÇALVES, Carlos Walter (2003). Geografando nos varadouros do mundo. Brasília: IBAMA.

HAESBAERT, Rogério (2008) "Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade". In: HEIDRICH, Álvaro [et al.] (org). A emergência da multiterritorialidade: a ressignificação da relação do humano com o espaço. Canoas/Porto Alegre: Ed. ULBRA/EdUFRGS.

Las raíces coloniales racistas de la conservación occidental de los bosques: una mirada a un proyecto REDD en Kenia

Sería equivocado histórica y políticamente el no identificar firmemente que los conceptos occidentales de conservación de la naturaleza tienen sus raíces en la época colonial. La ecologista política y ecofeminista Vandana Shiva, deja muy clara esta relación en su libro "Abrazar la vida: Mujer, ecología y supervivencia", cuando afirma que,

"Cuando los británicos colonizaron la India, primero colonizaron sus bosques. Ignorantes de su riqueza y de la riqueza de los conocimientos de la población local para manejar de manera sustentable los bosques, desterraron los derechos locales, las necesidades y los conocimientos locales, y redujeron esta fuente primaria de vida a simple madera". (Shiva 1990)

En la década de 1970, la movilización de las mujeres del movimiento Chipko de la región del Himalaya, que se alzaron en protesta para proteger sus bosques de la explotación comercial poniendo sus cuerpos y sus vidas en riesgo, dio continuidad a casi un siglo de resistencia en todo el país. La administración colonial británica aprobó las *Leyes Forestales de 1878 y 1972*, que erosionaron por completo los derechos de la población local a sus bosques a la vez que dieron acceso sin restricciones a los militares británicos y a sus empresas.

Estas mujeres no sólo rechazaban un orden político y económico impuesto para beneficio de los intereses del Imperio Británico, incluyendo a la élite local, sino que, en los hechos, cuestionaban las diversas manifestaciones del capitalismo hetero-patriarcal que ahora se expresaban en una redefinición y revalorización de la "naturaleza" a partir de una visión occidental patriarcal del mundo. Una visión que prioriza las ganancias frente al bienestar de las personas y los ecosistemas, así como a su trabajo productivo y reproductivo. Se trata de una visión ciega ante la interconexión de la "naturaleza" y profundamente impregnada de las políticas racistas de concebir a lo "nativo" y sus formas de conocimiento como "el otro".

Uno de los lugares donde estas tensiones y diferencias ideológicas se manifiestan fuertemente es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) - el organismo mundial encargado de trabajar con los gobiernos del mundo para elaborar una forma de abordar la crisis climática. Lamentablemente, los grupos progresistas y las comunidades de vanguardia en lucha contra los impactos de la crisis coinciden en que las negociaciones han estado abiertas a grupos de presión empresariales y permitieron que los países occidentales - que han sido los que han tenido la mayor responsabilidad por la crisis - socavaran los principios de equidad y justicia y forzaran a los países del Sur a soportar la mayor parte de la carga de los esfuerzos de adaptación y mitigación a través de los mercados de carbono.

La importancia de los bosques y de los ecosistemas forestales para este planeta va mucho más allá de ser literalmente los pulmones de la tierra mediante la absorción de las emisiones de dióxido de carbono y la liberación oxígeno. Millones de personas en todo el mundo, en especial los pueblos indígenas, dependen de los bosques como su medio de vida y para cubrir la totalidad o parte de su sustento. Los bosques recargan los acuíferos cuando el agua pasa entre sus raíces; protegen los ecosistemas aguas abajo al absorber la escorrentía superficial, y tienen un importante valor espiritual, cultural y lingüístico en todo el mundo, pero más aún en las cosmovisiones de los pueblos indígenas.

La Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) es un ejemplo de un mecanismo del mercado de carbono amparado por la CMNUCC. Le atribuye un valor monetario al carbono que es “absorbido” por los bosques, asumiendo que si se da dinero a las comunidades locales, a los Estados, a las ONG y a las empresas, eso será un “incentivo” suficiente para proteger los bosques - y el carbono que posean. Esto, entonces, plantea la crisis climática no como un problema histórico arraigado en el modelo de desarrollo capitalista basado en los combustibles fósiles, sino más bien como un problema de mercado que debe ser resuelto por el mismo sistema económico, o los mismos sistemas económicos, que crearon el problema.

REDD en Kenia: reforzando desigualdades históricas

El “proyecto REDD corredor Kasigau”, ubicado en el Condado Taita Taveta de Kenia, resulta un caso interesante que muestra las formas en que los mercados de carbono despolitizan y deshistorizan no sólo las experiencias de la comunidad local con respecto a las formas en que sus ecosistemas y medios de vida han sido destruidos, sino también las discusiones mundiales sobre el cambio climático. El proyecto, ahora en su tercera fase de ejecución, se inició en 2008 en fincas con diversos sistemas de propiedad y de tenencia de la tierra: individual, empresas privadas y Empresas Agrícolas Dirigidas (DAC, por su sigla in inglés).

El proyecto está dirigido por *Wildlife Works*, una empresa privada con sede en Estados Unidos, que estima que el proyecto Kasigau ayudará a evitar más de 48 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono durante un período de 30 años. Las reducciones de emisiones se efectuarían principalmente a través de prácticas de supervisión y manejo de cambios en el uso del suelo, que incluyen suspender la agricultura de tala y quema, la producción de carbón, así como la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques. Se estima que el proyecto emplea 400 personas para el funcionamiento de sus actividades, incluida una fábrica de procesamiento de prendas de vestir para exportación.

Los créditos de carbono generados por el proyecto se venden en el mercado voluntario y los ingresos se dividen entre 3 partes (al menos en teoría): un tercio es para el ejecutor del proyecto - *Wildlife Works* -, otro tercio es para las comunidades locales de las zonas de asentamiento, mientras que el tercio restante es para los dueños de la finca. Una investigación publicada el año pasado pone de relieve los problemas que existen en la forma en que actualmente se reparten las ganancias. En realidad, los dueños de la tierra (propietarios de la finca) son los primeros que reciben el dinero, luego se deducen los

costos del proyecto y lo que queda del dinero se distribuye entre las comunidades locales (1).

La investigación también revela que los dueños de las haciendas habían firmado acuerdos contractuales a 30 años, que les daban derecho a percibir una tercera parte de los ingresos generados antes de deducir los costos asociados a la ejecución del proyecto. Las comunidades locales, por otra parte, no tenían ningún acuerdo jurídicamente vinculante con el proyecto que definiera claramente su participación en los ingresos. Sólo tenían algo que podría ser descrito como un “acuerdo de caballeros”, y a menudo sólo recibieron una sexta parte de los ingresos recaudados. Esto a pesar de que a las comunidades no se les permite practicar agricultura de subsistencia ni utilizar los bosques como solían hacerlo.

Pero la distribución de los ingresos no es el único problema asociado con el proyecto. Hay serios problemas en torno a cómo el proyecto de carbono refuerza aún más las desigualdades históricas en torno a la tierra sufridas por las comunidades locales (sobre todo de Taita) desde que Kenia era una colonia británica. La tierra en la que se asienta el proyecto fue inicialmente tierra comunal, antes de que las políticas coloniales del siglo XX cambiaran drásticamente el sistema de tenencia de la tierra transformándolo en diversas formas de propiedad privada que los sucesivos gobiernos posteriores a la independencia de Kenia consolidaron aún más.

En las décadas de 1920 y 1930, el gobierno colonial facilitó la instalación de haciendas agrícolas comerciales a gran escala, las cuales plantaron principalmente sisal y café mediante el arrendamiento de tierras a granjeros blancos. Durante este período, miles de comunidades locales fueron desalojadas rápidamente de sus tierras y también se les restringió el acceso a las tierras comunales que utilizaban periódicamente para la caza, la recolección y el pastoreo. El gobierno catalogó a estas tierras como “improductivas” (*idle*), un término que todavía se utiliza para describir las tierras utilizadas por las comunidades locales e indígenas en todo el mundo. Además de esto, se anexó más tierra de las comunidades locales para la creación de parques y reservas nacionales, lo cual incrementó aún más sus reclamos sobre el territorio y también deterioró el conocimiento y la relación que las comunidades mantenían con la naturaleza y la vida silvestre.

Luego de la independencia se crearon fincas en tierras en fideicomiso (tierras en manos de los consejos de gobierno locales, a nombre de las comunidades locales), pero en lugar de revertir las injusticias históricas sufridas por las comunidades durante mucho tiempo, una élite local - que consiste principalmente de políticos - se concedió a sí misma y a sus aliados arrendamientos de tierra en forma individual o como accionistas de las Empresas Agrícolas Dirigidas (DAC, por su sigla en inglés). Con el tiempo, la mayoría de las haciendas se endeudaron debido a la mala gestión y a la caída general de los mercados locales de café y sisal. Pero la dinámica de la propiedad de las haciendas todavía continúa, aun cuando numerosos miembros de la comunidad se han visto obligados a convertirse en ocupantes ilegales de esas haciendas y de otras tierras que están en manos de particulares.

¿Qué ocurre cuando las comunidades ya marginadas por los sistemas de tenencia de la tierra - que privilegian la propiedad privada individual - quedan sujetas a proyectos que aseguran que el poder y la riqueza basada en la tierra permanezca en manos de unos pocos? ¿Y qué sucede cuando estos proyectos restringen las formas de vida y sustento

de las comunidades al “encerrar” los bosques para destinarlos a proyectos de carbono? El proyecto Kasigau no sólo profundiza la injusticia en torno a la tierra sino que también favorece explícitamente a los dueños de las haciendas en lo que se refiere a la asignación de las ganancias. Sin embargo, son las comunidades locales las que deben asumir los costos derivados de la inseguridad de la tierra y de las rígidas demandas del proyecto de carbono en cuanto al uso de la tierra.

Las “cuestiones del carbono” no pueden separarse de las preocupaciones más amplias relativas a los derechos sobre los bosques y los derechos humanos. Ésta es la razón por la cual las comunidades y activistas de todo el mundo exigen que tanto los discursos sobre el cambio climático como las soluciones, deben considerar la política y las historias del mundo, y particularmente los discursos geopolíticos que han marcado la asociación de los países del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur.

Tal como están las cosas, mecanismos de mercado como REDD+ redefinen la “naturaleza” tomando un sendero particularmente ideológico que reforzaría aún más la “supremacía” de un concepto de conservación occidental que sólo ve a los bosques como árboles y luego, literalmente, como dinero. Mientras tanto, las comunidades locales son consideradas obstáculos para la “conservación de la naturaleza” y, por ende, para la obtención de lucro. En última instancia, REDD+ no se ocupa de las causas fundamentales de la destrucción de los bosques. Proyectos como el proyecto Kasigau no sólo profundizan las desigualdades locales y las prácticas racistas sino que también permiten que las industrias contaminantes que compran los créditos de carbono generados, hagan lo mismo en otros lados.

La escala y la velocidad de las crisis ecológica, alimentaria, energética y climática no sólo no tienen precedentes sino que sus impactos se concentran en gran medida en el Hemisferio Sur y en los espacios y territorios del Hemisferio Norte donde residen las personas de color, incluidas las naciones tribales y las primeras naciones. En todo el mundo ha sido muy evidente que los impactos de la crisis ecológica tiene claros marcadores raciales y de clase. El “encierro” de la tierra y los territorios comunales para establecer proyectos REDD+ refuerza las ideas contrarias a lo comunitario, la lucha de clases de los pobres, las ideologías racistas que discriminan a los indígenas y a las mujeres, y las ideologías racistas y discriminatorias en torno al acceso a la tierra. ¡Debemos reforzar la idea de que nuestros bosques no están en venta!

Ruth Nyambura, africanecofeminist@gmail.com

Ruth es miembro del colectivo ecofeminista africano “African Ecofeminist Collective”

(1) <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715002926>

La “Naturaleza-no-humana”: una invención que busca romper sociedades enraizadas en los bosques

¿Alguna vez te has preguntado a qué hace referencia la palabra “naturaleza”? Las raíces coloniales de este concepto y su actual uso dominante aluden a una “naturaleza” definida como lo natural-no-humano. Una colección de especies “intocadas” o un “espacio salvaje” separado de las poblaciones humanas. Aunque promovidas a inicios del siglo pasado, estas ideas continúan rigiendo muchos de los debates y proyectos que

se desarrollan actualmente en nombre de la “conservación”, con “expertos” y ONGs especializadas en el “control” y “manejo” de la “naturaleza”. Por tanto, los pueblos que han co-existido por generaciones en y con estos “espacios” son vistos como una amenaza y un estorbo para “conservar” la codiciada naturaleza-no-humana. El supuesto de superioridad de tales “expertos” sobre los conocimientos, las prácticas y las vidas de los pueblos del bosque refuerza la idea errónea y racista de que la naturaleza y los seres humanos están separados. Esto alude a que los “expertos” – en su mayoría blancos y “civilizados” - pueden ingresar, estudiar y modificar la naturaleza-no-humana, mientras que niega el rol que durante miles de años han cumplido los pueblos de los bosques en la conformación de dicha “naturaleza”. Por ende, la idea dominante de que existe una separación entre naturaleza y sociedad se torna elemental en el empuje por fragmentar y dominar los conocimientos y sociedades enraizadas en el bosque.

La mayoría de las agencias de conservación resaltan las supuestas amenazas que genera la expansión de las poblaciones humanas en donde se encuentra la “naturaleza”. Una naturaleza externa que, como tal, se puede dominar, controlar, manejar, categorizar y (ab)usar plenamente como “recurso natural”. La supremacía de esta definición en el imaginario político es también una estrategia de dominación y poder. Como el pensador Boaventura de Sousa Santos explica: “Transformada en recurso, la naturaleza no tiene otra lógica que la de ser explotada hasta la extenuación. Separada del hombre y de la sociedad, no es posible pensar en interacciones mutuas” (1). Es así que, en el empuje actual de la Economía Verde, incluso las actividades de “conservación” se convierten en otro recurso. Las “áreas protegidas” se establecen cada vez más tomando en cuenta los beneficios económicos que conllevan los mercados de compensación. Los proyectos tipo REDD o de [compensación por la pérdida de biodiversidad](#) por ejemplo, generan créditos vendibles en los mercados financieros que además permiten una deforestación/contaminación “equivalente” a la “conservada” en el proyecto de compensación.

En este contexto, no es de extrañarse que la gran mayoría de los proyectos de “conservación” que trabajan con comunidades estén dirigidos a intentar “enseñar” o “capacitar” a los pueblos de bosque sobre el uso de otras prácticas de subsistencia que permitan dejar sus entornos “intactos”. En otras palabras, se les restringe enormemente el uso de sus bosques y territorios así como la posibilidad de existir como pueblo en estrecha interacción con su entorno. Así, se intenta destruir pueblos que viven no solo en estrecha relación pero como parte intrínseca de la “naturaleza”.

¿Pero acaso la deforestación no se genera por la destrucción a gran escala que ocasionan las actividades extractivas, de infraestructura, de plantaciones industriales, de maderero, etc.? Así es. Y por eso el enfoque de esta reflexión está en cómo la mayoría de los proyectos de “conservación”, integrados a un sistema estructuralmente racista, apuntan a “cambiar” a los pueblos del bosque y no a las causas directas de la deforestación. La misión “civilizatoria” de la colonización sigue, y muy presente, en las prácticas y formas de pensar de muchas ONGs y programas gubernamentales, lo que a su vez encubre el papel destructivo de los proyectos industriales a gran escala en la deforestación.

La práctica de rotación de cultivos tradicional por ejemplo, utilizada ampliamente por las comunidades del bosque - que consiste en el uso de una pequeña área de bosque para el cultivo de alimentos por algunas estaciones para luego dejar regenerar el área

mientras se prepara otra área para el cultivo-, es identificada como la gran causa de la deforestación. Instituciones multilaterales como el Banco Mundial y la FAO han sido cruciales en la estigmatización de esta práctica como “retrógrada” o “atrasada”. En 1957, a partir de un informe de la FAO donde se declaraba que el cultivo de rotación era una “forma atrasada de cultura general” (2), se consolida entre los “expertos” de la materia como una práctica devastadora de biodiversidad y bosques.

Es importante recalcar que la conversión permanente de bosques en pastizales o monocultivos a gran escala es claramente nociva, ya sea que ésta haya sido hecha por empresas transnacionales o locales. Pero eso es radicalmente diferente de la práctica tradicional de rotación de cultivos. A pesar de las muchas diferencias entre pueblos, tradiciones y bosques, el común denominador es que la rotación de cultivos permite mantener un suelo fértil, evita el uso de pesticidas o fertilizantes y permite la regeneración del bosque al dejar descansar el área cultivada y mantener un ciclo de rotación constante. En los casos donde el cultivo de rotación está produciendo la degradación del bosque, es común que la causa anterior sea un acortamiento de los ciclos de rotación porque hay menos tierra disponible y esto hace inviable la rotación. La degradación es casi siempre el resultado de la expansión de las mega plantaciones industriales o los mega proyectos de infraestructura o la tala industrial, que acaparan la tierra de la que las comunidades dependen para la producción de alimentos (3).

REDD: ¿bosques con gente sin derechos?

Como era de esperarse, el cultivo de rotación al ser estigmatizado como uno de los principales problemas de los bosques, es ahora también presentado como un problema frente al cambio climático. Los programas y proyectos REDD manifiestan incansablemente tener la supuesta “solución” ante el “problema” poblacional de la “naturaleza”, al afirmar que REDD les dará beneficios económicos a las comunidades siempre y cuando estas mantengan sus bosques intactos. Es decir, transforman territorios en bosques-sin-gente o bosques-con-gente-sin-derechos-de-uso, creando mayores conflictos entre y dentro de las comunidades y atentando contra sus medios de sustento y conocimientos tradicionales. Los documentos oficiales de REDD usualmente incluyen propuestas para aumentar los rendimientos en las parcelas existentes, a través de la “modernización” de prácticas tradicionales, tales como los cultivos de rotación. La realidad, sin embargo, es que la gran mayoría de estas propuestas fracasa, porque no son adecuadas a las particulares circunstancias locales. Además, la idea de querer “educar” a los pueblos del bosque para “mejorar” sus prácticas tradicionales con un proyecto que generará créditos que a su vez permitirán la continua contaminación/deforestación en otro lugar es primordialmente racista y paternalista.

Para los grupos de conservación internacional como *The Nature Conservancy*, Conservación Internacional y WWF, REDD es un buen negocio, porque ellos pueden obtener una gran parte de las donaciones internacionales y el financiamiento para clima que está disponible para REDD. Participan en muchos proyectos e iniciativas REDD, operan en muchos casos como intermediarios para llegar a las comunidades y actúan como consejeros en los planes REDD a nivel nacional, regional y municipal. Ninguno de estos grupos ha revelado el tamaño de sus presupuestos REDD o cuánto de su financiamiento proviene del financiamiento para clima que los países industrializados contabilizan como pagos de REDD al Sur global (4).

“No hay compensación, sólo sanciones que pagar”: el programa de Conservación Integral de los Bosques de Madagascar, de WWF y Air France (5)

El “Programa de Conservación Integral de los Bosques” de Madagascar está dirigido por WWF Madagascar. Abarca 380.000 hectáreas de bosque húmedo y 125.000 hectáreas de bosque seco, espinoso. La primera etapa del proyecto, de octubre de 2008 a diciembre de 2012, fue financiada por una contribución de 5 millones de euros de la aerolínea Air France. *GoodPlanet* actuó como enlace entre Air France y WWF Madagascar y fue responsable de los aspectos metodológicos y científicos del proyecto. Con el inicio de la segunda fase del proyecto en el año 2012, la Fundación *GoodPlanet* transfirió la gestión de las actividades a la asociación Etc Terra. La financiación de esta segunda etapa provino de la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, mientras que Air France también podría aportar un millón de euros adicionales. La generación de créditos de carbono es uno de los objetivos de la segunda etapa.

Un informe de Basta! y Amigos de la Tierra Francia cita a Pierre de Caussade, ex Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para Air France, cuando manifestó: “Este proyecto fue desarrollado en parte para ayudar a las comunidades locales a gestionar mejor sus medios de vida y mejorar sus condiciones de vida. Pero también había un aspecto científico, en consonancia con nuestras preocupaciones sobre el cambio climático. Estimamos que el programa nos permitirá reducir las emisiones causadas por la deforestación en 35 mil millones de toneladas de CO2”

En 2010, Air France emitió una declaración aclarando categóricamente que de ninguna manera el proyecto era un programa de compensación de carbono. Dos años y medio más tarde, Air France reconoce que el proyecto generará créditos de carbono y afirma que todo el dinero se destinará a las comunidades locales. Un informe y un video de Amigos de la Tierra Francia muestran que esto tampoco es cierto. La aplicación del proyecto limita el acceso de la población a zonas de bosques y arriesga desplazar a las poblaciones locales, poniendo así en peligro sus medios de subsistencia. Los bosques y la tierra ya no son espacios que pueden ser un medio de vida y sustento, sino que se convierten en reservas de carbono que deben ser protegidas por Air France para poder ofrecer a sus clientes vuelos que sean neutrales en carbono. Para vigilar las tierras cuyo uso está prohibido se creó una policía forestal, la que se encargaría de rastrear a los aldeanos que abren claros en el bosque para cultivar alimentos para consumo propio. Cualquier persona sorprendida en el acto se arriesga a recibir una fuerte multa. Si el individuo no puede pagar, corre el riesgo de que lo envíen a la cárcel. Las patrullas cuentan con el complemento de aviones que sobrevuelan las aldeas. Las actividades de vigilancia muestran que uno de los principales objetivos del proyecto es impedir que las comunidades practiquen *hatsake*, o agricultura migratoria: “Si no quiero pagar [la multa], corro el riesgo de terminar en prisión. Estamos asustados, por eso ni tocamos el bosque allí. Ni siquiera para alimentar a nuestros hijos. Es realmente difícil: ¿dónde vamos a conseguir 800.000 ariary [moneda nacional] si nos encuentran abriendo un claro en la tierra?” preguntó un aldeano a los investigadores de Basta! y Amigos de la Tierra Francia.

Las actividades de “conservación” parecen relacionarse mucho más al acaparamiento de territorios, despojo de derechos colectivos y beneficios económicos por parte de las grandes industrias (al poder continuar y expandir sus negocios sin problemas) que a

cualquier otra cosa. Los financistas de las ONGs de conservación y de proyectos de compensación tipo REDD nos alertan sobre quiénes son los beneficiados realmente: industrias extractivas, empresas de plantaciones industriales, el Banco Mundial, entre otros. Del mismo modo, la estigmatización de la agricultura de rotación tradicional como causa principal de la deforestación así como el despojo de los derechos de uso de los pueblos del bosque son un ataque frontal contra estas poblaciones y sus culturas. Mientras que la convivencia de los pueblos con la “naturaleza” sigue siendo atacada y hasta prohibida, a pesar de haber logrado mantener los bosques en pie, los ríos limpios y los suelos fértiles, los proyectos y programas de “conservación” vienen facilitando la continuación de un sistema económico que está en las raíces de la devastación ambiental y social.

Joanna Cabello, joanna@wrm.org.uy

Miembro del secretariado internacional del WRM

- (1) Boaventura de Sousa Santos, 2008, “Conocer desde el Sur: para una cultura política emancipadora”, http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Conocer%20desde%20el%20Sur_Lima_2006.pdf
- (2) <http://www.fao.org/docrep/x5382e/x5382e03.htm#shifting%20cultivation>
- (3) http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2015/10/REDD+Peasants_ES.pdf
- (4) http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2015/10/REDD+Peasants_ES.pdf
- (5) Caso resumido de la publicación del WRM, “REDD: Una Colección de conflictos, contradicciones y mentiras”, http://wrm.org.uy/es/files/2014/12/REDD-Coleccion_de_conflictos_contradicciones_y_mentiras_expandido.pdf
Ver también Basta! & Amigos de la Tierra (2013): “REDD+ in Madagascar: You Can’t See the Wood for the Carbon”. http://www.amisdela tierra.org/IMG/pdf/rap_madagascar_en.pdf

Colombia: Mujeres semillas de movilización y resistencia

*Si nos tocan la sangre, nos tocan la tierra
Si nos tocan la tierra, nos tocan la sangre*
Consigna de las mujeres del pueblo Xinka (Guatemala)

La política de desarrollo de los últimos gobiernos nacionales en Colombia ha sido la de priorizar la extracción de bienes naturales, con explotaciones a gran escala, para la exportación. Para ello, la “confianza inversionista” se ha constituido en el discurso que justifica la promoción de políticas, programas y proyectos que favorecen a las grandes transnacionales mineras y petroleras. Mientras avanza la frontera extractiva y se consolidan proyectos para la extracción, fundamentalmente de petróleo y minerales, crece también la defensa de los territorios del agua y de la vida, varios de estas luchas lideradas por mujeres.

En Santander, las mujeres del río Sogamoso han luchado durante varios años en defensa de su territorio frente al proyecto hidroeléctrico que ha usurpado el nombre del Río. En 2011, las mujeres del norte del Cauca realizaron una marcha rechazando la minería ilegal y legal que perturba su tranquilidad y no garantiza su buen vivir. En Piedras, Tolima, un grupo de mujeres fue el corazón de la primera consulta popular que se ha realizado en Colombia contra la minería. En la Guajira las mujeres se han organizado para defender su territorio de una explotación de carbón que tiene ya varias décadas de extracción; en todo el país, las mujeres son cruciales en las luchas antiextractivas, y su

voz y propuestas se hacen cada vez más presentes en los escenarios de la confrontación con las políticas y proyectos.

Esta situación es similar en el escenario latinoamericano. En Honduras es imposible imaginar el proceso social contrahegemónico sin recordar el papel que cumplió Berta Caceres, recientemente asesinada; en Ecuador, las mujeres indígenas y ecologistas han liderado gran parte de las dinámicas de defensa territorial; en Perú, Máxima Acuña Atalaya, una mujer campesina, se enfrentó a la empresa minera Yanacocha y a la policía para defender su territorio en Cajamarca del proyecto minero Conga. Máxima fue recientemente reconocida con el premio internacional Goldman, que se entrega a destacadas personas defensoras de la naturaleza. A nivel de articulación, existe la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de la Naturaleza, que articula procesos de mujeres desde México hasta el Cono Sur del continente.

En este contexto y desde hace más de dos décadas, Censat Agua Viva (Amigos de la Tierra, Colombia) acompaña a comunidades y organizaciones que defienden sus territorios frente al avance de los procesos extractivos. En 2011, el contexto de profundización del modelo extractivista atizó las luchas sociales en defensa del agua y la vida, y en estos procesos la participación de la mujer se hizo cada vez más notoria. Por esta razón, decidimos convocar el Encuentro Nacional y Latinoamericano Mujeres y Minería, con el propósito de socializar la dimensión de la política nacional minera y su plan de desarrollo, así como los impactos sobre la vida de las mujeres y las alternativas que ellas y las comunidades construyen en defensa de su vida, su cuerpo y su territorio. Este encuentro contó con la presencia de mujeres de varios países latinoamericanos y la participación activa de mujeres de varias regiones del país, posibilitando la realización de un diagnóstico del impacto de la minería sobre la vida de las mujeres y las condiciones de sus territorios y comunidades, e identificar y socializar acciones de resistencia comunitaria en la defensa del territorio, y las formas como las mujeres se involucran en estos procesos.

En 2013, se convocó a un grupo de alrededor de 45 mujeres provenientes de Caquetá, Santander, Guajira, Meta, Chocó, Tolima, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Vaupés, para que hicieran parte de la Escuela de la Sustentabilidad Mujeres y Minería. Las mujeres hacen parte de organizaciones campesinas, indígenas, negras, ambientalistas y urbanas.

A través de este proceso formativo se posibilitó el intercambio de experiencias y se logró una reflexión que permitió ahondar sobre las afectaciones a las relaciones sociales y culturales de las mujeres que habitan un territorio donde se desarrolla alguna actividad extractiva. A partir de este trabajo se reconocieron las afectaciones directas en el cuerpo de las mujeres y se fortaleció la posición de defender el *territorio-cuerpo* para defender el *territorio-tierra*; enfatizando en la relación con los bienes comunes, principalmente con el agua.

En los procesos organizativos las mujeres han potenciado la revalorización de los saberes tradicionales y la cultura, y han contribuido a democratizar las organizaciones comunitarias y sociales. El énfasis sobre la economía, la defensa del territorio y la cultura en manos de las mujeres, llevan a la reflexión colectiva y fortalecen los lazos comunitarios. No obstante, aún la inserción de la mujer en los diferentes espacios y

procesos de resistencia requiere de un trabajo sistemático y constante, pues muchos espacios de la vida política y social del país están hechos por hombres y para hombres.

Sobre nuestro ejercicio documental

Durante más de cuatro años, registramos en material audiovisual la dinámica organizativa y formativa de las mujeres en la Escuela de la Sustentabilidad y sus encuentros, transitamos las regiones para acompañarlas y registrar sus luchas, sus movilizaciones, sus protestas.

El documental “Mujeres Defendiendo Territorios” (1) permite de esta manera hacer evidentes las dificultades que las mujeres sufren, lo que Berta Cáceres caracteriza como el “sistema capitalista, racial y patriarcal”, que se sustenta en una “dictadura transnacional”, que funciona a través del despojo de territorio a las comunidades y que violenta de manera particular las vidas de las mujeres. La minería, en palabras de Lorena Cabnal ejerce violencia sobre los cuerpos y la naturaleza.

Las defensoras de la vida y los territorios se enfrentan permanentemente a contextos locales de represión y agresión. Son frecuentes los hostigamientos, las amenazas, la persecución a las mujeres defensoras, por parte de los estados, los actores armados, las empresas privadas e incluso por parte de compañeros de sus organizaciones que se oponen a la participación y liderazgo de las mujeres. La impunidad frente a estas agresiones reina. Por ello, las mujeres, junto a sus organizaciones han debido generar estrategias para enfrentar la persecución, amenazas de muerte y criminalización de la que son objeto.

Pero las mujeres no solo denuncian, el documental permite ver, cómo también se constituyen en semillas de movilización y resistencia. Las mujeres hacen marchas, organizan consultas autónomas y populares para que las comunidades y la ciudadanía puedan expresar su rechazo a la minería en su territorio, fortalecen sus argumentos, construyen propuestas económicas, e impulsan estrategias de cuidado de la vida y del territorio.

El documental deja ver además la diversidad de las luchas de estas mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas y urbanas que tejen solidaridad, fuerzas, propuestas, saberes y memoria para seguir movilizándose y construyendo activamente en sus comunidades locales y aunando lazos de solidaridad en sus luchas con otros procesos en América Latina.

A disfrutar del video!

Censat Agua Viva, Colombia
<http://censat.org/>

(1) Ver video en: <http://censat.org/es/videos/mujeres-defendiendo-territorios>

TRAMPAS Y ENGAÑOS QUE PROMUEVEN EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

Proyecto de Río Tinto de compensación por pérdida de biodiversidad en Madagascar: la cultura y la religión utilizadas para imponer restricciones

En septiembre de 2015, *Re:Common* y el WRM investigaron una de las iniciativas de compensación por pérdida de biodiversidad más ampliamente propagandeadas en el sector de la minería: el proyecto de la empresa Río Tinto, en el sureste de Madagascar. Río Tinto y sus socios del sector conservacionista alegan que, a la larga, la estrategia de conservación de biodiversidad de la compañía tendrá incluso un “impacto positivo neto” en la biodiversidad, con lo que quieren decir que la presencia de la compañía en la zona supondría, en última instancia, un beneficio para la biodiversidad. Esto a pesar de que la extracción de ilmenita en la mina de Río Tinto destruirá 1.600 hectáreas de un bosque costero único, que alberga numerosas especies que sólo se encuentran en este tipo de bosque en Madagascar. El “impacto positivo neto” se lograría con una combinación de medidas de conservación dentro de la concesión minera y compensaciones por pérdida de biodiversidad en tres lugares diferentes.

El WRM y *Re:Common* visitaron comunidades afectadas por una de las compensaciones de biodiversidad, el área de Bemangidy-Ivohibe, a unos 50 kilómetros al norte de la concesión minera. Quisimos averiguar qué piensan de esta iniciativa piloto en el sector minero los más directamente afectados por el proyecto de Río Tinto.

Incumplimiento en comunicar a las comunidades que el “proyecto de conservación”, de hecho, es una compensación por pérdida de biodiversidad

Lo que encontramos fue que las comunidades no han sido debidamente informadas de lo que son realmente las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Omitieron decirle a los aldeanos que lo que se les presentó como un “proyecto de conservación” fue ideado en realidad para compensar la destrucción de un bosque litoral único y excepcional - así como los medios de vida de las familias que dependen de ese bosque - cerca de la ciudad de Fort Dauphin, a unos 50 kilómetros al sur del proyecto de compensación por pérdida de biodiversidad Bemangidy-Ivohibe, donde Río Tinto QMM (1) extrae ilmenita.

Por ejemplo, poco después de nuestra llegada a una aldea nos dijeron: “La empresa QMM tiene este proyecto aquí para proteger el bosque, y está trayendo estudiantes de Tana [Antananarivo, la capital de Madagascar] para hacer investigaciones aquí en el bosque. No entendemos mucho qué quiere hacer aquí QMM. Está plantando algunos árboles y eso es todo. No entendemos y les estaríamos muy agradecidos si ustedes pudieran brindarnos más información sobre sus planes”.

Antes de la llegada del proyecto de compensación por pérdida de biodiversidad de Río Tinto QMM, los aldeanos practicaban agricultura de rotación para cultivar su alimento básico, la mandioca, en el borde del bosque. Una de las restricciones que impone ahora el proyecto de compensación es que los aldeanos ya no están autorizados a plantar mandioca en ese lugar ni utilizar el bosque como lo hacían antes.

La seguridad alimentaria bajo amenaza

Cuando se les dijo a las comunidades que ya no podrían plantar en el borde del bosque, los aldeanos comenzaron a buscar nuevos lugares donde cultivar. El único del que

podieron disponer fueron las dunas de arena. Ahora deben recorrer entre 3 y 4 kilómetros desde sus aldeas - casi una hora - para llegar a sus campos de cultivo, atravesando pequeñas lagunas y arroyos. Explicaron que durante la época de lluvias (de noviembre a abril), ir y venir de los campos es traicionero, sobre todo cuando regresan con la carga de alimentos. Además, la productividad en el suelo arenoso es más baja que en los suelos del bosque, y el cultivo de mandioca no prospera. Los nuevos campos de mandioca no están produciendo lo suficiente como para alimentar a todas las familias de las comunidades.

En términos de seguridad alimentaria, el proyecto de compensación por pérdida de biodiversidad de Rio Tinto QMM en Bemangidy está por tanto resultando un desastre. Deja a los aldeanos sin su alimento básico gran parte del año y las familias no tienen ingresos regulares en efectivo como para comprar alimentos. A la vez, ninguna de las actividades alternativas de generación de ingresos prometidas al inicio del proyecto se concretaron en aldeas como Antsofso, y los aldeanos aún no han recibido compensación por la pérdida de acceso a sus tierras tradicionales.

Los aldeanos que viven en este sitio de compensación por pérdida de biodiversidad consideran que las restricciones les fueron impuestas sin que mediara negociación alguna y prácticamente sin tener en cuenta su situación. “Ellos no vienen a preguntar, vienen a avisar”, fue uno de los comentarios que hicieron los aldeanos en varias ocasiones durante nuestra visita. Si se encuentra a alguien haciendo agricultura en el bosque sin un permiso, o en zonas donde se prohíbe su uso, debe pagar una multa de entre 50.000 y 1.000.000 de Ariary (entre 15 y 300 euros). Para poner esto en perspectiva, más del 75 por ciento de los malgaches vive con menos de 2 dólares diarios y el salario mínimo oficial en Madagascar en 2015 era de 125.000 Ariary (35 euros al mes). “Si uno no puede pagar la multa, lo llevan al Departamento Forestal y luego a la cárcel”, explicó uno de los aldeanos durante una reunión de la comunidad.

Tácticas deplorables para hacer cumplir las restricciones

Las instituciones estatales y el sector de la conservación de Madagascar están utilizando cada vez más expresiones arraigadas en formas consuetudinarias de toma de decisiones sobre el uso de las tierras tradicionales para hacer cumplir las restricciones sobre su uso en las áreas protegidas y en sus alrededores. Un ejemplo es cómo algunas ONG conservacionistas utilizan el término “*dina*”.

Una *dina* forma parte del sistema consuetudinario de regulación del uso de las tierras tradicionales dentro y entre las comunidades. El proceso de acordar una *dina* implica una negociación entre quienes usan la tierra en torno a cómo se puede utilizar determinada zona. Por esta razón, una *dina* genera un grado de respeto que generalmente no lo tiene la reglamentación estatal. Hasta hace poco, una *dina* no era un documento escrito, no necesitaba serlo. Aquellos a quienes se aplicaba habían participado de la negociación y, como parte del proceso, se comprometían a respetar lo que habían establecido de mutuo acuerdo.

En la última década, sin embargo, las autoridades estatales y ONGs conservacionistas comenzaron a utilizar el término *dina* en documentos que contienen reglas escritas impuestas a las comunidades como parte de los proyectos de conservación. Un artículo académico sobre la transferencia de la gestión de áreas protegidas en Madagascar señala

que las *dinas* vinculadas a dichas transferencias de gestión “reflejan la agenda de la institución (ONG y/o proyecto) que apoya la implementación de la transferencia de gestión, en lugar de las prioridades de la comunidad. Carecen de la flexibilidad de las normas tradicionales y no toman en consideración la situación económica específica de quienes infringen las reglas. Se centran en la represión y las sanciones y no en las modalidades de extracción de los recursos”. (2)

En las conversaciones, los aldeanos mencionaron una “*dina* de Asity”. Asity Madagascar es la filial nacional de *BirdLife International* en Madagascar y está a cargo de la implementación del proyecto de compensación por pérdida de biodiversidad en Bemangidy-Ivohibe. Según explicaron los aldeanos, la *dina* de Asity prohíbe utilizar fuego en la ladera, ni siquiera para recuperar zonas de agricultura migratoria donde se pudiera plantar el cultivo. Poco después de nuestra visita en septiembre de 2015, un aldeano quemó la vegetación en una de estas áreas para prepararla para sembrar. Los aldeanos presentes en una reunión en la que se discutieron los resultados primarios del informe de campo, explicaron que el aldeano atraviesa serias dificultades y necesita tierra para cultivar mandioca. Se le ordenó pagar una multa de 100.000 Ariary [30 euros] por prender fuego en una zona donde la *dina* que regula el uso del bosque en el área de compensación por pérdida de biodiversidad lo prohíbe.

Las reuniones realizadas con una ONG conservacionista involucrada en la aplicación del proyecto revelaron, además, que se ha recurrido a métodos deplorables para garantizar el cumplimiento de estas restricciones sobre el uso del bosque. En las reuniones oímos hablar de diversos métodos y tácticas utilizadas para “que el proyecto de compensación sea un éxito”. Estas tácticas no son quizás un caso único en el sector conservacionista. Sin embargo, rara vez se comparten tan abiertamente.

Nos dijeron que debido a que Rio Tinto QMM está implementando el proyecto con miras a crear un “impacto positivo neto” en la biodiversidad, las ONG conservacionistas tenían la obligación de ayudarlos a lograrlo. Luego nos explicaron cómo lo hicieron en el sitio de compensación Bemangidy-Ivohibe.

Para introducir las actividades de compensación por pérdida de biodiversidad de Bemangidy, personal de la ONG participó de una serie de visitas a las comunidades. En algunas ocasiones fueron visitas conjuntas de la empresa y la ONG; en otras, personal de la ONG visitó las aldeas en torno a Bemangidy sin los representantes de Rio Tinto QMM. Estas visitas fueron presentadas a veces como una forma de implementar el proyecto de compensación de manera participativa, y otras veces como parte de un proceso de persuasión sutil. “Básicamente, fue un lavado de cerebro”, nos dijeron en determinado momento de la conversación. (3)

En una primera reunión, personal de la ONG les hablaba de la importancia del bosque, para luego presentar la compensación por pérdida de biodiversidad, a la que se refirieron como un proyecto de conservación. También hubo una dura crítica a las actuales prácticas locales de uso de la tierra. Nos enteramos que no todas las reuniones de la comunidad anduvieron bien. Una reunión en particular, en la que estaban presentes representantes de Rio Tinto QMM, fue descrita como “un fiasco”, en parte porque los aldeanos habían pedido que se resolviera el tema pendiente de recibir una compensación por la pérdida de acceso al bosque.

Para evitar un “fiasco” similar en las reuniones siguientes, en el comienzo introdujeron un servicio religioso. La reunión sobre el proyecto de compensación que se hizo a continuación, también se llevó a cabo en la iglesia, “para evitar alteraciones”. (4) Se pensó que la gente se mantendría más tranquila en una iglesia. Los aldeanos lo describieron como una forma de “aprovecharse de la cultura ecuménica”, también por la manipulación de aludir a que Dios y los ancestros eran quienes habían pedido la protección del bosque “para las generaciones futuras y para respetar a los antepasados”.

La ONG sacó partido de la fuerte cultura de reciprocidad de las costumbres tradicionales - la importancia de compartir y el sentimiento de que si no se aprende a dar tampoco se recibirá -, que también le permitió desechar los pedidos de compensación con mayor facilidad.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad - doble acaparamiento de tierras en nombre de la biodiversidad

La compensación por pérdida de biodiversidad de la minera Rio Tinto QMM en Bemangidy-Ivohibe, en el sudeste de Madagascar, ha precarizado aún más los medios de subsistencia de las comunidades que afecta, las cuales enfrentan aún mayores riesgos de hambre y privaciones como resultado directo de un proyecto que beneficia a una de las empresas mineras más grandes del mundo. Y aún así, Rio Tinto es capaz de afirmar que su mina de ilmenita ha venido “al rescate de la biodiversidad única de la zona litoral de Fort Dauphin”. (5) Esto a pesar de que las actividades de extracción de mineral destruirán una gran parte de las 1.600 hectáreas de dicho bosque dentro de la concesión.

La gigante minera y sus colaboradores hablan con entusiasmo de un “impacto positivo neto” en la biodiversidad, alegando que el bosque costero del cual extrae la ilmenita habría sido destruido de todos modos en los próximos decenios por las prácticas agrícolas de los campesinos locales. Los argumentos utilizados para fundamentar esta afirmación son muy cuestionables. Rio Tinto QMM argumenta que con la conservación de algo de bosque dentro de la concesión minera, y con la protección y restauración de un bosque en otro lugar similar al destruido por la mina, las actividades mineras de la empresa darán como resultado un “impacto positivo neto” en la biodiversidad, en comparación con lo que de otro modo hubiera ocurrido. Afirman, además, que de no haber sido por las actividades llevadas a cabo por Rio Tinto y sus socios a través de la compensación por pérdida de biodiversidad, el bosque de ese lugar hubiera sido destruido por la agricultura campesina.

La realidad, sin embargo, es muy diferente a lo que cuentan los vistosos folletos distribuidos por todo el mundo. Los medios de subsistencia de los pobladores afectados no sólo por la propia minera sino también por la compensación por pérdida de biodiversidad, se han tornado aún más precarios para que Rio Tinto pueda aumentar sus ganancias de la extracción de ilmenita. Por lo tanto, en realidad, el proyecto modelo de Rio Tinto QMM se convierte en un doble acaparamiento de tierras en nombre de la biodiversidad.

*El informe está disponible en inglés y francés en <http://wrm.org.uy/other-relevant-information/new-report-rio-tintos-biodiversity-offset-in-madagascar/>.
Puede obtenerse una versión malgache a pedido.*

Es posible acceder a un resumen en italiano en <http://www.recommon.org/linganno-del-biodiversity-offsetting-il-caso-rio-tinto/>.

- (1) La mina es explotada por *QIT Madagascar Minerals* (QMM), una empresa conjunta en la que Rio Tinto posee el 80% de las acciones y el estado de Madagascar el 20% restante.
- (2) M. Berard (2011): *Legitimite des normes environnementales dans la gestion locale de la foret a Madagascar*. Canadian Journal of Law and Society, vol. 26. P 89-111.
- (3) Respuesta de Asity a la descripción de la conversación, recibida el 08 abril de 2016 por correo electrónico: “*la façon dont on a rédigé la phrase ne relate pas vraiment la réalité. Primo, le « lavage de cerveau » n’est pas le mot approprié, mieux vaut dire que c’est un moyen d’apporter des éclaircissements pour la population. Secundo, les visites servent à sensibiliser la population sur les tenants et aboutissants du projet Offset.*” [“La forma en que está redactada la frase no refleja verdaderamente la realidad. En primer lugar, el ‘lavado de cerebro’ no es la palabra adecuada, más bien se diría que se trata de un medio de aclararle a la población. En segundo lugar, las visitas sirven para sensibilizar a la población acerca de cómo funciona el proyecto de compensación”.]
- (4) Respuesta de Asity a la descripción de la conversación que se hace en el informe, recibida el 08 abril de 2016 por correo electrónico: “*En voici la réalité : tout au début, des groupes de personnes trouvaient toujours les moyens de perturber la réunion. Pour éviter cela, nous avons négocié avec les responsables de l’Eglise de Iaboakoho à débiter la réunion par une prière, et de prendre les décisions difficiles dans l’église même.*” [La realidad es que, al principio, siempre hay personas que encuentran la manera de interrumpir este tipo de reuniones. Para evitarlo, negociamos con los líderes de la Iglesia de Iaboakoho para comenzar la reunión con una oración, y tomar las decisiones difíciles en la iglesia”.]
- (5) *A mine at the rescue of the unique biodiversity of the littoral zone of Fort Dauphin*, material de prensa de QIT Madagascar Minerals SA, 2009.

ALERTAS DE ACCIÓN

Actualización sobre los hostigamientos de POSCO en Odisha, India
A pesar de la declaración del Tribunal Nacional Verde de India, que a comienzos de abril ratificó que la Autorización Ambiental de POSCO es válida sólo hasta al 19 de julio de 2017, el caso no fue cerrado y tendrá otra audiencia a principios de mayo de este año. Mientras tanto, la policía estatal convirtió la zona en una colonia de represión. Se interpusieron más de 420 casos falsos contra aldeanos y se emitieron órdenes judiciales contra más de 2000 personas. Las medidas de recuperación de tierras también han enfrentado persecución y criminalización. Diversos movimientos populares organizaron tres días de protesta a principios de este año y reclaman que se obligue a POSCO a anunciar formalmente su total e inmediato retiro del proyecto; se les regrese todas las tierras ocupadas por POSCO, se detenga todo tipo de represión; entre otras cosas.

RECOMENDADOS

Poder empresarial sobre territorios y personas

El último número del Boletín Nyéléni por la soberanía alimentaria, pone de relieve la importancia de la lucha contra el creciente poder que están adquiriendo las empresas transnacionales, así como el impacto negativo de dicho poder en la vida de las personas. El agua, las semillas, la tierra, entre otras cosas, forman cada vez más una parte fundamental de la actividad de un grupo de empresas, que realizan sus actividades con total impunidad, generando una especie de “colonialismo empresarial”. El boletín hace eco de los crímenes cometidos por las empresas contra comunidades en Nigeria o la privatización de ciudades en Honduras.

Puede leerse el boletín (en inglés) en:

http://viacampechina.org/en/images/stories/pdf/2016-03-16-Nyeleni_Newsletter_Num_25_EN.pdf

La violencia estalló en los campos y en los bosques de Brasil

El Cuaderno sobre los Conflictos en el Campo 2015 fue lanzado el 15 de abril pasado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil. Los datos de la investigación muestran una realidad terrible. El año pasado sucedieron 50 asesinatos. Y la impunidad reina. Lo que es peor aun: 59 personas sufrieron intentos de asesinatos y otras 144 recibieron amenazas de muerte, dejándolas con la inseguridad de si morirán pronto. Una barbarie que, en términos cuantitativos, no ocurría desde el 2004. Lo peor ocurre en la Amazonía, sobretodo en Pará y Rondonia: en esos estados 40 personas fueron asesinadas. Los conflictos, según el abogado de la CPT en Marabá, José Batista Afonso, están presentes en todo el país y se derivan de causas estructurales relacionadas a la expansión del capital en el campo y al aumento de la concentración de la tierra. Un reportaje de CartaCapital nos dice que “los quilombolas e indígenas están en lucha por el territorio, los campesinos luchan por la tierra, y todos están siendo exterminados, asesinados, despojados”.

Lea el reportaje en portugués: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/553769-a-explosao-da-violencia-na-luta-pela-terra-e-territorio>

Acceda a la investigación completa de CPT en portugués:

<http://www.cptnacional.org.br/index.php/downloads/finish/43-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/14019-conflitos-no-campo-brasil-2015>

El WWF en la RDC: ¿conservación sin gente?

Un cortometraje de *Rainforest Foundation UK* sobre las comunidades del bosque afectadas por la Reserva Tumba Lediima, en la República Democrática del Congo (RDC), revela cómo se ha ignorado, y se sigue ignorando, a las comunidades que viven en la zona de la Reserva. La Reserva fue establecida en 2006 por el gobierno de la RDC en colaboración con el WWF, para la cual se contrató a “eco guardias” de ICCN, la agencia de protección de la naturaleza congoleña. Las prácticas agrícolas y de caza de las comunidades locales han sido severamente limitadas, tanto que ha habido un importante aumento de la desnutrición. Además de esto, las comunidades locales sufren diversos abusos contra los derechos humanos. Como expresa en el video un representante comunitario de una de las aldeas afectadas: “Cuando patrullaban, buscaban nuestros campamentos. Torturaron gente. Violaron mujeres”. A 10 años de la creación de la Reserva, es claro que la violencia debe cesar.

Para ver el video (en inglés) ir a: <https://vimeo.com/163667069>

El video acompaña el informe de la misma organización “*Protected Areas in the Congo Basin: failing both people and biodiversity?*” De las 34 áreas protegidas incluidas en el estudio, 26 han informado algún tipo de desplazamiento de la población local (y posiblemente se agreguen otras seis áreas de las cuales no había datos disponibles); 21 han informado de conflictos entre la administración del parque y las comunidades locales, incluidas graves violaciones a los derechos humanos (y posiblemente se agreguen otras diez áreas de las cuales no había datos disponibles); 18 informaron que previo a la creación de la Reserva no se realizó consulta alguna a la población local (y posiblemente se agreguen otras cuatro áreas de las cuales no había datos disponibles). El informe puede leerse en: <http://blog.mappingforrights.org/wp-content/uploads/38342-Rainforest-Foundation-Conservation-Study-Web-ready.pdf>

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Jutta Kill, Flavio Pazos, Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Avenida General María Paz 1615 oficina 3. CP 11400, Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943

wrm@wrm.org.uy - <http://www.wrm.org.uy>